SITUACION ECONOMICA Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Madrid, septiembre de 2018

Área de Estrategias Sectoriales
C/ Ramírez de Arellano, 19 –1ª y 6ª planta– 28043 Madrid
www.industria.ccoo.es
Afiliada a IAE, IGU, EFFAF y UITA

I N D I C E

Situación y riesgos de la economía internacional 3

Evolución de la economía española 5

Evolución del empleo..... 8

Pérdida de poder adquisitivo, riesgo de pobreza y exclusión de los y las jóvenes..... 12

La industria española: evolución y perspectivas 14

Empleo en la industria 18

Perspectivas para el futuro del empleo en la industria 22

Industria y Presupuestos Generales del Estado..... 24

El sector agropecuario: un sector que requiere apoyo 27

Principales retos para el sector agropecuario 30

Medidas e instrumentos de actuación para un futuro industrial digitalizado..... 32

Afrontar los cambios en el empleo y en las relaciones laborales 34

Efectos de la automatización de la industria y los nuevos empleos..... 36

Cambios en la organización de la empresa..... 38

La regulación digital en el marco europeo..... 41

Debilidades españolas para la adecuación a los cambios y propuestas de actuación sindical 42

Situación y riesgos de la economía internacional

La economía mundial sigue mostrando fuertes crecimientos (3,7%), impulsado por un repunte en el comercio, una mayor inversión y una boyante creación de empleos. Este mayor dinamismo de la actividad global se observó en economías desarrolladas y emergentes. En las primeras, el crecimiento del PIB lo hizo en seis décimas (del 1,7 % al 2,3 %) y en las emergentes se avanzó del 4,4 % al 4,7%.

En cualquier caso, el consumo privado ha seguido siendo el motor del crecimiento en las economías avanzadas. Así, la de Estados Unidos (EEUU) creció un 2,3%, en Japón un 1,6% y en la Eurozona un 2,5%. Por su parte, la economía china creció un 6,9%. El resto de las economías emergentes también presentan tasas de crecimiento superiores a las experimentadas en 2016. Por su parte, el sector industrial mundial, presentó un crecimiento de la producción que se situó en torno al 3,2%, una tasa más contenida que en años anteriores.

Se espera que durante el periodo 2018-2019 el ritmo de la expansión mundial rondará el 4%, cifra cercana al promedio a largo plazo. Sin embargo, se avecinan riesgos importantes, causados por tensiones comerciales, vulnerabilidades del mercado financiero y alzas en los precios del petróleo. Asimismo, queda mucho por hacer para alcanzar una fuerte y continua mejora a medio plazo del nivel de vida, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Fondo Monetario Internacional (FMI), ha advertido de los conflictos que provocan incertidumbre en el normal desarrollo del comercio mundial, como es el crecimiento del proteccionismo. En este marco, y en poco más de un año, desde los EEUU se viene cercenando el libre comercio que tanto defienden: *se ha retirado del acuerdo transpacífico (Tratado de Libre Comercio con Europa-TIP-); ha empezado por poner aranceles al acero y aluminio europeo, y piensa hacerlo con el sector de automoción; está renegociando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte -México y Canadá- (TLCAN); ha amenazado con la imposición de aranceles a varios productos procedentes de China; rechazó el Trans Pacific Partnership (TPP), firmado por su antecesor para la integración comercial mundial, que daría a EEUU acceso comercial a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam y todo el Océano Pacífico; y ha cuestionado el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC).*

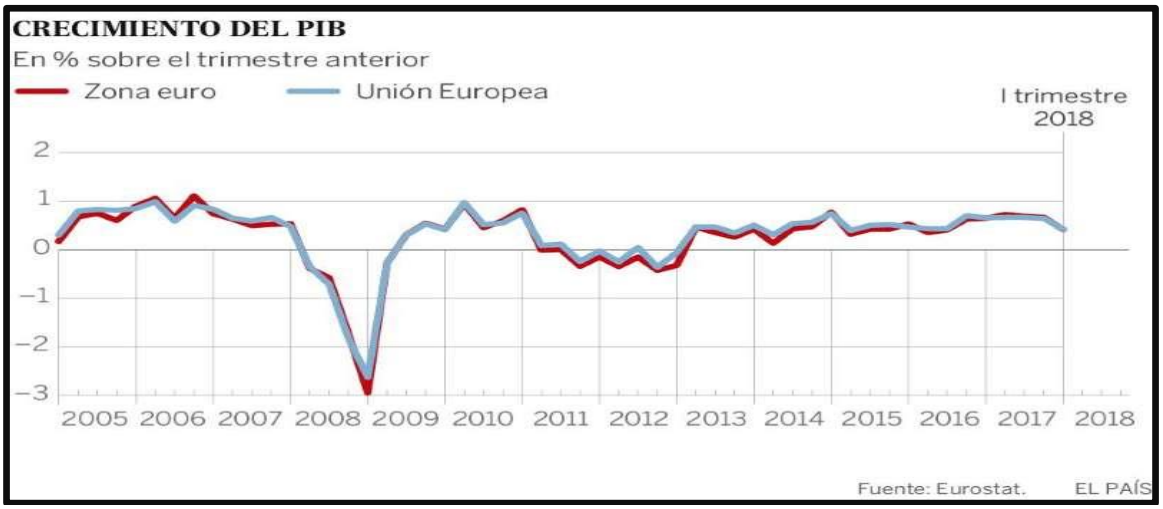
La imposición de aranceles es la fórmula que quiere aplicar el presidente Trump para resolver los desequilibrios macroeconómicos que tiene su país, sin tener en cuenta que la fórmula no es levantar barreras sino acometer medidas políticas dirigidas a la economía en su conjunto, como herramientas fiscales o reformas estructurales. Por su parte, China, ha aprovechado para revitalizar y acelerar a fondo su nueva Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), que incluye a ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, además de seis países: Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India.

Pero, también es preciso recordar que China gestiona su política comercial sin tener en cuenta las reglas de juego internacional, en materia de políticas de protección intelectual y favoreciendo a sus empresas estatales. Mientras que la sobrecapacidad de algunos sectores y las transferencias forzadas de tecnología son aspectos que afecta a la relación comercial de EEUU con la Unión Europea (UE)[1].

No es casual la ofensiva del presidente Trump, sobre todo, cuando hablamos de un crecimiento del continente asiático que llega hasta el 6% (casi el 7% en China), convirtiéndose en la región de mayor expansión del planeta, debido a la fortaleza del gasto de los consumidores, el aumento de la inversión pública y privada, y la mejora de las exportaciones. Mientras que EEUU parece haber tocado techo, de tal forma que los analistas consideran que China ya lo supera como principal motor de la economía mundial, aportando un 31,5% del avance del PIB global en 2016, siendo esta cifra superior a la contribución conjunta de EEUU, Japón y la eurozona en aquel ejercicio.

Lo que es evidente es que los riesgos económicos de corto y medio plazo han aumentado por las vulnerabilidades financieras, derivadas de los tipos de cambio, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, además de un crecimiento débil en algunas economías avanzadas. Por su parte, la UE y EEUU tienen una relación estrecha, basada en la inversión, lo que se manifiesta en una fuerte conexión entre ambas economías. Las empresas europeas establecidas en EEUU venden por importe de 2,4 billones de dólares, más de tres veces las importaciones norteamericanas desde Europa en 2016.

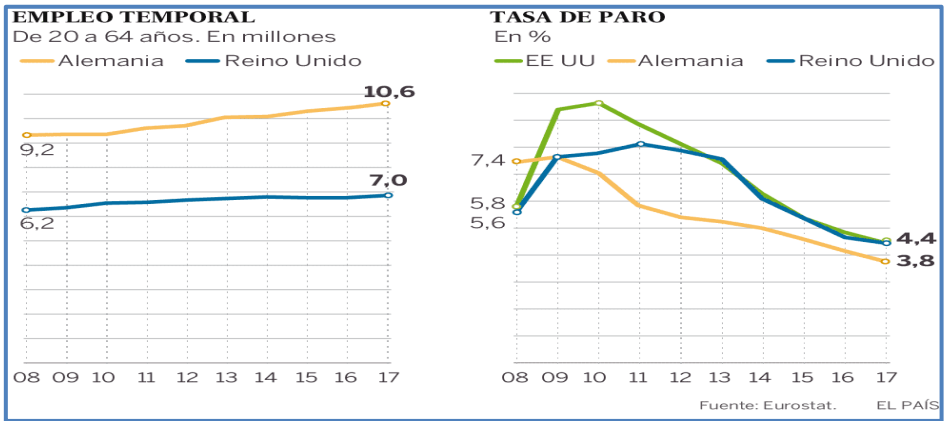
La economía europea está frenando su crecimiento durante el año 2018. A las cicatrices de la recesión se le une la cuenta atrás hacia el Brexit y el recrudecimiento de la guerra comercial con EEUU, su principal socio. Todo ello, con cinco millones de parados menos en cuatro años; 20 trimestres consecutivos de crecimiento; y, en 2017, como el mejor año en una década para la eurozona, y a pesar de las muestras de flaqueza de Alemania en el comienzo del año, junto a las de la economía francesa.



[1] Christine Lagarde, directora general del FMI.

El euro continúa fuerte frente al dólar, lo que penaliza las exportaciones. Y el petróleo, que ha abaratado la factura del combustible en los últimos tiempos, se asienta por encima de los 70 dólares el barril, frente a los 30 de principios de 2016.

A pesar de los evidentes síntomas de reducción del desempleo en los países desarrollados, (por debajo del 4% en EEUU y el R. Unido; Alemania, con la tasa más baja desde la reunificación; Japón, con el 2,2%, ...), la menor duración de los contratos es un fenómeno global y relacionado con el desarrollo tecnológico, que facilitan este tipo de contratos o sistemas vinculados a la plataformas digitales (uberización).



Fuente. Eurostat

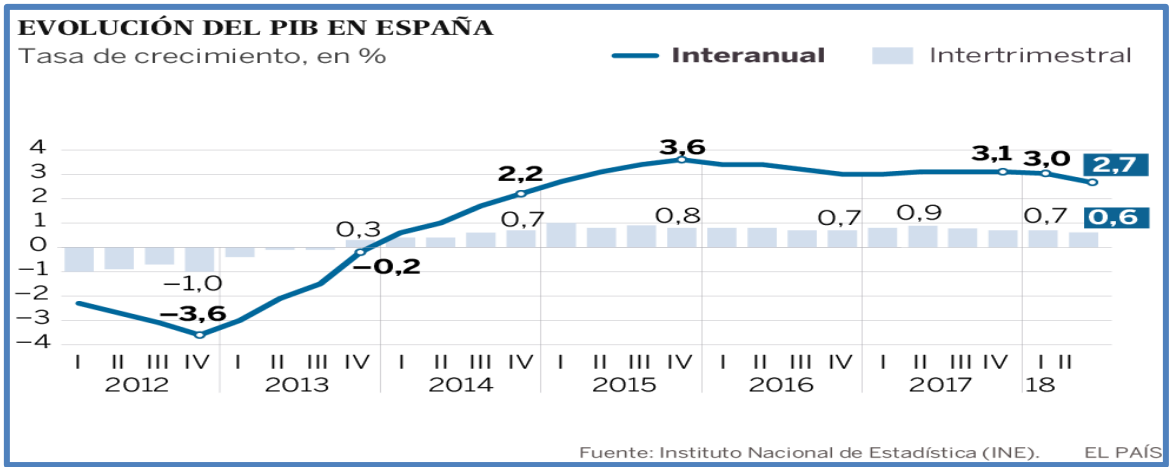
Según el FMI, la participación en los ingresos de los trabajadores ha pasado de superar el 50% de la renta total a principios de este siglo a menos del 40% en 2015. Esta tendencia decreciente comenzó ya a mediados de los años setenta del siglo XX. El salario mínimo en EEUU se ha mantenido en los últimos diez años en 7,25 dólares la hora (6,25 euros), y que, en términos reales, desde 1979, ha caído el 20%. En Alemania, los ajustes se centran en el número de horas trabajadas: *se despide poco, pero las empresas que más sufren acuerdan recortes de horas (y salario)*.

Evolución de la economía española

La economía española acumula tres años consecutivos de crecimiento por encima del 3%. En 2017, el Producto Interior Bruto (PIB) recuperó el nivel máximo alcanzado antes de la crisis. Con 18 trimestres de alzas y 19 en el avance trimestral. Sin embargo, experimentó en el segundo trimestre de 2018 un brusco frenazo (2,7%), lo mismo que la tasa anual de crecimiento del empleo, que se ha ralentizado en 2018. En general, se manifiesta una mejora que no es sentida por la ciudadanía, porque no llega a la sociedad y no se percibe que el crecimiento sea sólido, sostenible y justo.

Se ha producido un cambio estructural, en el que la construcción y la inversión en vivienda adquieren menos peso, gana poco la industria y las exportaciones aumentan. Uno de los desequilibrios más importantes es el déficit comercial (10% del PIB), consecuencia del abaratamiento de las importaciones. Además,

empieza a agotarse la demanda de bienes como los electrodomésticos o los automóviles[2], cuyas compras se pospusieron durante la crisis y se han disparado con la recuperación. El turismo también ha mostrado crecimientos más suaves y las exportaciones exhiben una leve ralentización, aunque las grandes empresas mantienen el pulso.



Uno de los puntos más notorios de esta situación es el brutal encarecimiento del precio del barril -en más de 30 dólares-, lo que dispara la factura exportadora del país, costando, al menos, 8.000 millones de dólares. Además, afecta a la inflación y resta poder adquisitivo a la ciudadanía. Sin olvidar, que la disminución de la contribución del PIB del turismo extranjero lastra la creación de empleo y los ingresos de los hogares, por las características del mercado laboral español.

España se ha convertido en unos de los países de la UE que menos invierte en relación con su PIB. Gasta lo mismo que Alemania, en proporción a su capacidad económica, pero invierte igual que Portugal e Irlanda, dos países golpeados por la fuerza del euro. Solo Italia, con una economía estancada, destina menos que España.

La Comisión Europea (CE), destaca que la inversión pública española se sitúa en el 40% por debajo de la media de los últimos 23 años, asentándose en el 2,2% del PIB, frente al 3,6% de media que mantenía en la serie histórica, y al 2,8% de promedio europeo.

Esta falta de fondos afecta a la inversión en I+D+i al desarrollo industrial, al corredor del Mediterráneo, a educación, sanidad y al medioambiente. En educación ha caído a la mitad del máximo en 2009; en sanidad un 40% y en infraestructuras un 60%, respecto al año 2007, y un 80% sobre 2009, ejercicio que se impulsó el gasto por el Plan E. Solo ha recuperado algo el ferrocarril, que ha recortado 20 puntos de los 60 perdidos; mientras el gasto en I+D+i se ha desplomado (60%) en estos últimos años. No se producen las mismas consecuencias cuando cae la inversión en I+D que en infraestructuras porque

[2] El mercado del automóvil está viviendo un crecimiento inusitado durante los meses de julio y agosto de 2018, como consecuencia de la salida de stocks de las marcas ante la implantación del WLTP en septiembre. Ver informe de automoción CCOO Industria, septiembre 2018.

las carreteras pueden esperar. Pero si dejas de invertir en investigación los profesionales se marcha a otros países, perdiendo capital humano que has formado, por lo que tiene un coste adicional.

Por otra parte, la OCDE recomienda a España reformas en materia fiscal con el objetivo de conseguir una recaudación más efectiva. Propone el reducir la presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos. Otro aspecto es el referido a la mejora del acceso a la formación profesional (FP) y universitaria en España, ajustándola a las nuevas realidades del mercado laboral, lo que recortaría el elevado desempleo juvenil, aumentando la productividad. Para ello, resulta vital ampliar la FP dual y su desarrollo por parte de las empresas.

Mientras tanto, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno anterior, y el actual que los ha mantenido en sus principales contenidos, ha renunciado a dar soluciones a la precariedad y los problemas estructurales de la economía española. Los organismos internacionales siguen apuntando a la baja productividad y la alta desigualdad como dos de las principales amenazas para mantener el crecimiento económico del país.

Al mismo tiempo, España ha caído dos puestos en la lista de países más competitivos del mundo, liderada por EEUU y elaborada por la Escuela de Negocios IMD. Tras dos años consecutivos manteniendo el número 34 y haber subido 11 posiciones en un lustro, en 2018 ha bajado hasta el puesto 36 de un total de 63 países. En Europa, ocupa el puesto 17, uno por delante al año anterior.Las razones principales de este hecho son la pérdida de competitividad en diversas variables, entre las que resalta los precios de su economía, la legislación empresarial, el funcionamiento del mercado laboral, su política en impuestos y sus infraestructuras científicas.

También ha afectado el aumento de "*las preocupaciones relacionadas con la atracción y retención de trabajadores altamente cualificados y la falta de implementación de formación en el sector privado*". En cambio, sigue presentando factores atractivos para la competitividad: *dinamismo de la economía, la competitividad por costes, unas infraestructuras fiables y una actitud positiva y abierta*. Por el contrario, baja la media en eficiencia empresarial, hasta el puesto 42, y la del gobierno, al 38.

El gran enemigo de España es el empleo en sus diferentes variables. La recuperación de la actividad económica, sin una recuperación fuerte del empleo, es una característica de las últimas fases expansivas de las economías occidentales en las últimas dos décadas. En España el crecimiento del PIB no se ha traducido directamente en empleo, encontrándose aún lejos de su situación anterior a la crisis.

El país está, especialmente, mal situado en el empleo juvenil, el número 60 de 63 en el ranking. En tasa de desempleo se posiciona en el número 59, en la de trabajo en el 51 y en el puesto número 58, tanto en preparación para los y las trabajadoras como en atraer y mantener el talento y en emprendimiento.

La eficiencia del sector público español y del sector privado se estancaron en las posiciones 38 y 42, respectivamente. Mientras que la calidad de las infraestructuras -que no mide sólo la obra pública, sino también sectores como la educación- ha empeorado, traduciéndose en una caída al puesto 27.

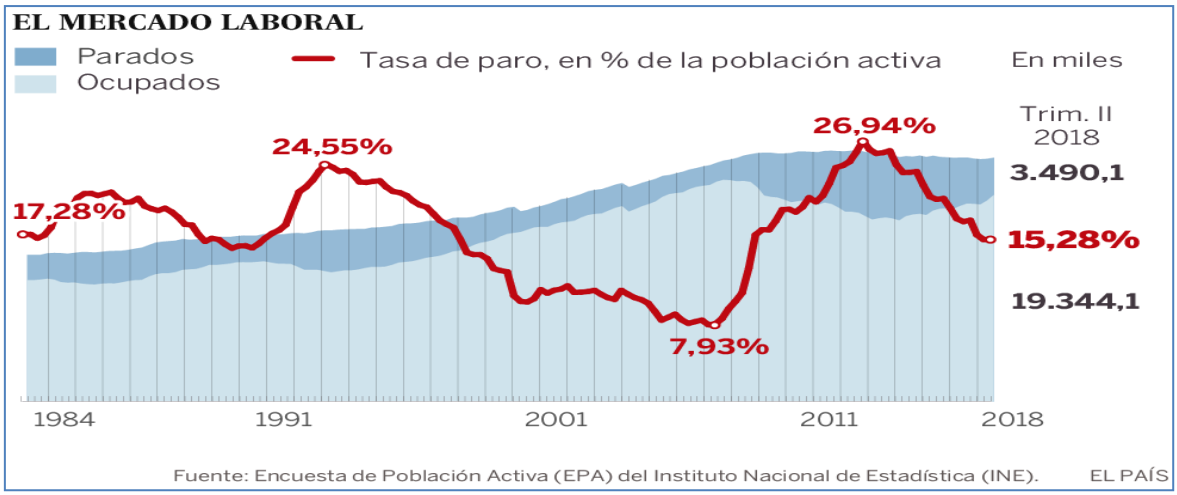
Por un lado, está el problema de la productividad. Las medidas económicas emprendidas para lograr la recuperación han impulsado la productividad, hasta el punto de que hoy la productividad real de España es mayor que la de Alemania. Sin embargo, los salarios han crecido muy por debajo de la productividad, por lo que se considera necesario reducir la brecha: *no a través de impuestos o salarios mínimos, sino con más empleo, mejores salarios y fomento del talento en los sectores adecuados*.

Se apunta un desajuste entre el sistema educativo y productivo que lastra la competitividad de la educación. No es que nuestro sistema educativo sea pobre, tenemos los mejores ingenieros de Europa. El problema es que no necesitamos más ingenieros, sino otro tipo de talento. Otra debilidad es la pobre calidad del sector público, por cuestiones de falta de talento y porque en los países más competitivos el sector público tira del sector privado.

Evolución del empleo

Si en el segundo trimestre de 2008, había 20,4 millones de ocupados, la cifra actualmente se sitúa en 19,3 millones, diez años después. Durante la crisis se perdieron 3,8 millones de empleos hasta el año 2014 y, desde entonces, se han recuperado 1,9 millones, sólo el 51% de los puestos de trabajo perdidos. En el segundo trimestre de 2008 había 2,4 millones de personas desempleadas y una tasa de paro del 10,4%. Diez años más tarde, hay un millón más de

parados, hasta alcanzar los 3,5 millones, con una tasa de paro que asciende al 15,3% y una tasa de empleo cercana al 50% (63,5% hombres). En el período diciembre 2007 hasta junio de 2018, el número de personas ocupadas refleja una pérdida de un millón (-5%).



En el 2º trimestre de 2018, las personas activas se sitúan en 22,8 millones de personas, correspondiendo una tasa de actividad cercana al 59% (64,6% hombres, frente al 53,3% de mujeres), cifras similares al mismo período del año 2008, pero con un millón menos de ocupados. El mes de agosto de 2018 ha tenido tintes dramáticos en materia de empleo, como consecuencias de la desaceleración de la economía y una peor evolución del turismo y la fuerte pérdida en el sector agrario, por lo que las perspectivas inmediatas reflejan una moderación en la creación de empleo para el tercer trimestre[3].

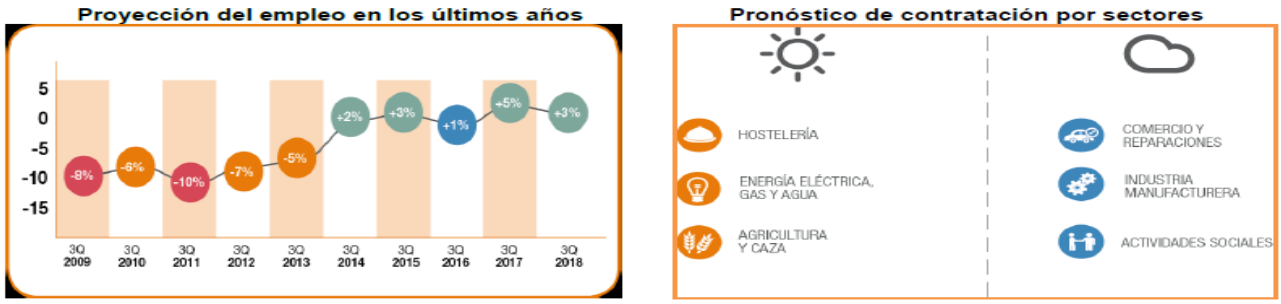
La pérdida de un millón de ocupados y su envejecimiento en el período 2009-2016 continuará en esta década, salvo que se produzca una fuerte corrección, a través de flujo migratorio[4]:

- Se creará empleo en cuatro de las seis regiones en las que se divide el país: Noroeste (+3%), Noreste (+2%), Sur (+2%) y Este (+1%). El arco mediterráneo, una de las áreas geográficas más activas en turismo.
- En siete de 10 sectores industriales, se espera aumentar los niveles de contratación. Especialmente relevantes son el sector de la hostelería (+17%) y el de energía eléctrica, gas y agua (+6%).
- En la clasificación por tamaño de empresa las grandes compañías son las que más impulso le dan a la contratación (+17%).

Además, el envejecimiento de la población, el consecuente incremento de los inactivos y el descenso paulatino de la población activa plantea incertidumbres para el mercado laboral, requiriendo esfuerzos importantes por parte del gobierno y de las administraciones españolas, mediante la adopción de políticas que frenen el envejecimiento, atraigan población inmigrante y

[3] En el peor agosto de la década se han perdido 203.000 empleos. El mayor registro de este mes desde el año 2011 y el peor desde el año 2008, tomando las cifras de la Seguridad Social.
[4] Índice laboral Manpower Group, tercer trimestre 2018. "*Tendencias del mundo de trabajo*".

combatan el desánimo de la gente que abandona el mercado de trabajo por la ausencia de expectativas. Lo que sitúa a la base demográfica del mercado laboral como principal problema de fututo, poniendo en crisis la solidaridad intergeneracional del sistema de pensiones y, por ende, la sostenibilidad.



Fuente: Manpower Group

Por otra parte, el colectivo de activos de entre 16 y 39 años ha perdido el empleo entre 2009-2016. No es un fenómeno exclusivo de España, pero en este país el salto de la última década destaca en Europa. También la industria ha retrocedido. Detrás de este fenómeno está el hundimiento de la construcción y el hueco que ha dejado, y el tirón de ramas como las de transportes y hostelería. De tal forma que el protagonismo del sector terciario se sitúa por encima de la eurozona y del conjunto de la UE.

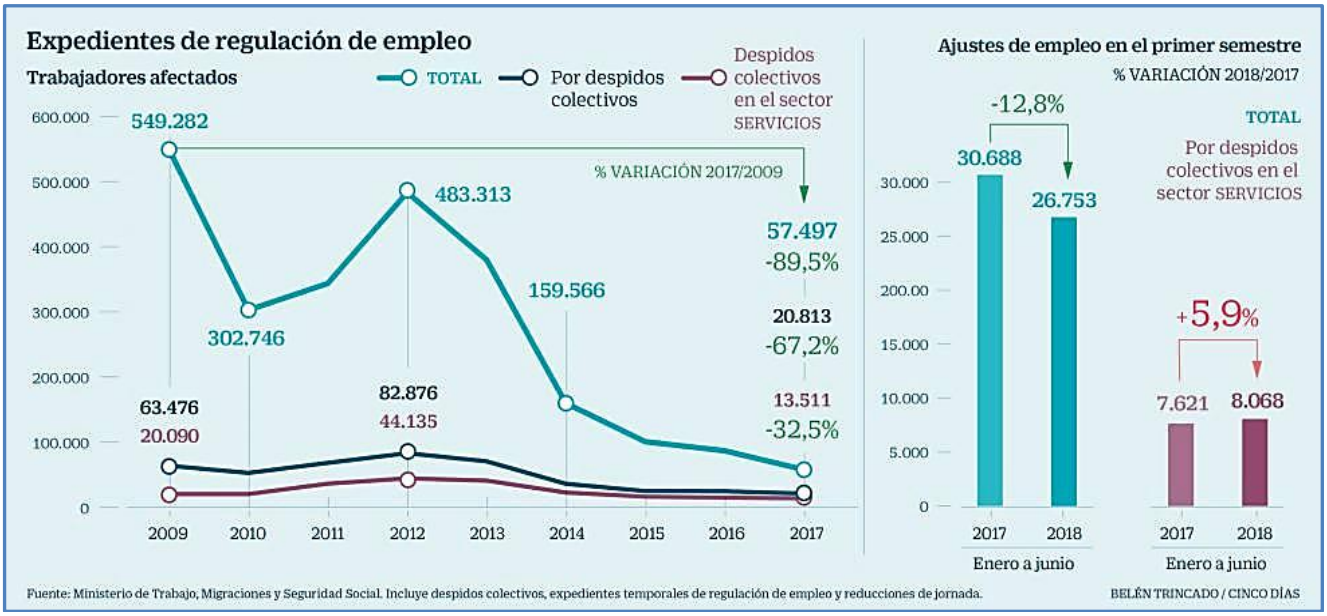
El sector servicios es el único que ha recuperado el empleo perdido en las dos recesiones, mientras que el resto se encuentra aún por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Buena parte de esta mejora se deba al avance de ramas como la hostelería (1,5 millones de empleos), al tratarse de actividades donde el nivel de cualificación de la mano de obra es relativamente reducido, por lo que se ve facilitado el trasvase entre ellas. También la sanidad y los servicios sociales se encuentran en números históricos, acaparando más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo (54%). A pesar de todo, se espera que la industria recupere parte del terreno perdido, pasando del 14,2% (con energía y construcción) al 15,3% del empleo total durante los próximos años.

Aunque en el conjunto de los sectores económicos se han reducido los despidos colectivos -vía expedientes de regulación de empleo- un 13%, han aumentado en el último trimestre de 2018 en el sector servicios, un 2,4%, por primera vez desde la recuperación.

Por primera vez, tras el inicio de la recuperación del mercado laboral en 2014, el número de trabajadores despedidos de forma colectiva de sus empresas en el sector servicios durante el primer semestre del año ha aumentado, concretamente un 6%. Seis de cada diez de estos despedidos trabajaban en empresas del sector financiero o de seguros o en el comercio y reparación de vehículos. La industria ha tenido un 11% menos de despidos colectivos, respecto al mismo semestre del pasado año.

También la industria comenzó el año con dos meses consecutivos de aumentos en el número de trabajadores afectados por despidos colectivos.

Aunque, a diferencia del sector servicios en las empresas industriales, en el cómputo semestral, han sido un 11% menos que en el semestre de 2017.



Por sectores, la ocupación interanual en el 2º trimestre de 2018 refleja una reducción del empleo en la agricultura (-1,2%), con 822.000 personas; un incremento en la industria (3,3%), con 2,7 millones; una fuerte reactivación en la construcción (7,2), con 1,2 millones; y el crecimiento en servicios (2,6%), con 14,6 millones. Respecto al segundo trimestre de 2008, la agricultura lleva perdido un 7,2% del empleo, la industria el 21,1%, la construcción el 110% y los servicios incrementan en un 5,5%.

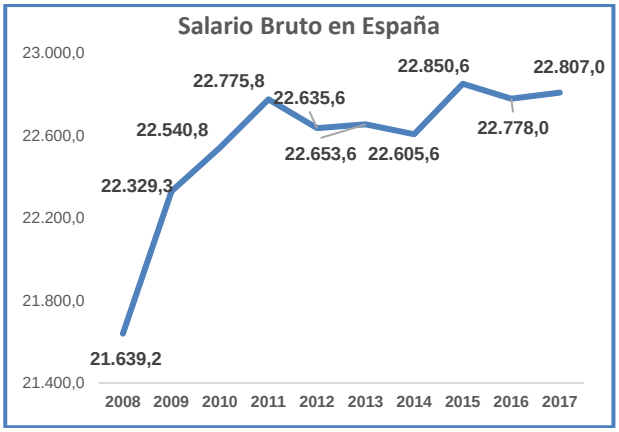
También en el 2º trimestre de 2018, las personas asalariadas se sitúan en 16,3 millones (16,9 en 2008), 11,9 con contrato indefinido (73%) y un incremento del empleo temporal hasta llegar al 27% (29,4% en el mismo período de 2008). Los contratos a tiempo parcial suman 2,9 millones de personas (el 17,7% del total, frente al 12% de 2008), un 74,5% mujeres.

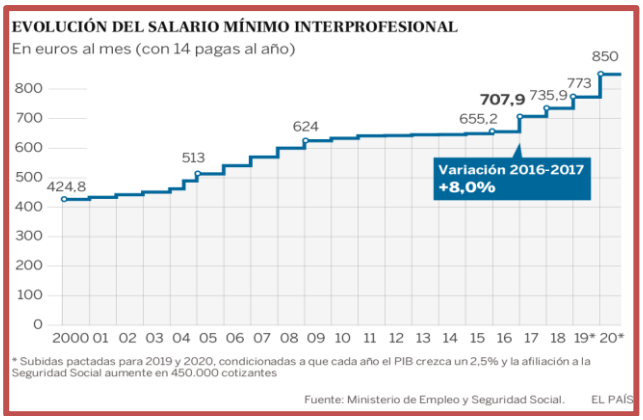
Continúa el deterioro de la calidad del empleo creado, sustituyendo contratos de calidad por precarios, superando éstos en un 35% al aumento de los contratos indefinidos, que suponen el 6,9%, frente al 93,1% de los temporales, de los cuales el 34,4% son a tiempo parcial.

En junio de 2018 había 1,3 millones de empresas inscritas a la Seguridad Social, con 13,9 millones de empleos. El 98% emplea a menos de 50 trabajadores y trabajadoras (44% del total) y el 0,34% de las empresas tenía más 250 empleos (38,2%). Las microempresas (de 1 a 9 empleos) suponen el 86,1% del total y emplean al 22% de los activos. La tasa de paro, del 15,3%, duplica a la de la UE (7%), con las mujeres soportando el mayor peso del desempleo (17,1%). En tasa interanual, la agricultura ha reducido el paro en un 9,5%, la industria el 4,6%, la construcción el 9,8% y los servicios el 9,1%.

Pérdida de poder adquisitivo, riesgo de pobreza y exclusión de los y las jóvenes

En 2017, el salario por hora trabajada incrementó un 2% en el conjunto de la eurozona, cinco veces más que en España, con un aumento del 0,4%, según Eurostat -excluyendo el sector agrícola-, situándose en el incremento más bajo de toda Europa. Resulta preocupante si se compara con el aumento de la inflación y el coste de la vida del pasado año (7%). No sólo se tienen los salarios más bajos de Europa, sino que los y las españolas siguen perdiendo poder adquisitivo.





Fuente: Encuesta Anual de Coste laboral del INE.

La divergencia entre la marcha de la economía y los salarios agudiza la situación española, frente a la del resto de la UE[5]. El salario más habitual cae, a pesar de que la economía crece más de un 3%. En 2017 repuntó un 0,1% sobre el año anterior, con un coste total bruto por trabajador de 30.744,8 euros en ese año, acompañado de un cierre del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 1,1% y una inflación media anual del 1,7%, lo que evidencia una pérdida de poder adquisitivo.

También se acompaña de una diferencia entre Comunidades Autónomas (CCA), que se sitúa en los 9.000 euros al año (18.400 en Extremadura y 27.000 en Madrid, 24.000 en Catalunya y Navarra); un 53% de diferencia entre el salario de una empresa de 200 o más trabajadores y las más pequeñas, registrando la industria el mayor coste por trabajador, sobre todo en energía, frente a los más bajos del sector de hostelería. La misma tónica se mantiene si se añade, al coste salarial de los trabajadores y trabajadoras, las cotizaciones y las remuneraciones no dinerarias. Tomando las retribuciones reales, el coste laboral suponen el 75% del resto de la eurozona y el 82% de la UE. Es decir, por cada hora trabajada el coste laboral asciende a 22,5 euros para un empresario español, frente al 30,1 euros en la eurozona y 27,2 en la UE[6].

---

[5] El aumento de los salarios es aún más lento que antes de la crisis financiera. A finales de 2017, el aumento nominal de los salarios en la zona de la OCDE fue de solo la mitad que el registrado 10 años antes*: en el segundo trimestre de 2007, cuando el promedio de tasas de desempleo de los países de la OCDE era casi el mismo de ahora, el aumento nominal de los salarios promedio era de 5.8% en comparación con el 3.2% del cuarto trimestre de 2017*.

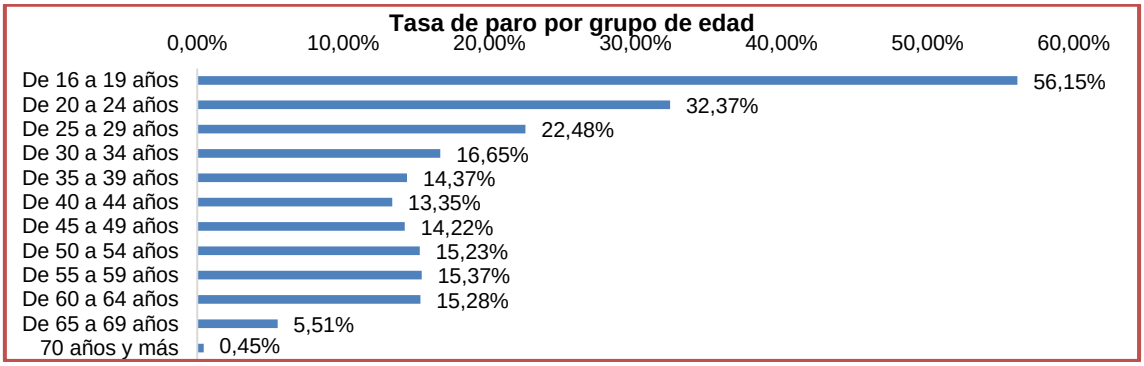
[6] En la UE, el país de mayor coste es Dinamarca (40,3 euros-hora), seguido de Luxemburgo (39,1), Alemania (34,4), Francia (34,2), terminando con Bulgaria (4,9 euros) y Letonia (6,9).

El peso que pierden las nóminas las gana las rentas del capital, cuya participación en el PIB suma el 42,5%, es decir, un nivel superior a los porcentajes previos a la crisis económica. Por tanto, el ajuste ha sido muy severo para los y las trabajadoras, por lo que ha llegado el momento de que las empresas incrementen los salarios para que las mejoras de la economía y del empleo se reflejen en las remuneraciones de los y las empleadas. Los salarios llegaron a casi los 560.000 millones de euros en 2008. Una década después, aún no se ha llegado a esa cifra, mientras que las rentas del capital se sitúan en la cifra nominal más elevada, superando en un el 6% los importes de 2008[7].

Por otra parte, España se situó en 2016 como el tercer país de la UE con más trabajadores de 18 años o más en riesgo de pobreza (13,1%), según datos de Eurostat. En el lado opuesto se ubican Finlandia (3,1%), R. Checa (3,8%), Bélgica (4,7%) e Irlanda (4,8%), situándose la media europea en el 9,6% e incrementándose de forma apreciable sobre el 8,3% de 2010.

Este riesgo de pobreza está condicionado por el tipo de contratos, siendo dos veces más alto para los empleos a tiempo parcial (15,8%) que para los de tiempo completo (7,8%). En la UE, el porcentaje medio de empleo en riesgo de pobreza es casi tres veces más grande para los temporales (16,2%) que para los indefinidos (5,8%). Por género, en España se reparte en un 13,7% entre los hombres y un 12,4% entre las mujeres. Mientras que en la UE los hombres acaparan el 10% y las mujeres el 9,1%.

Pese a que la precariedad no es algo exclusivo de mujeres y jóvenes, lo cierto es que estos dos colectivos protagonizan la peor cara del mercado laboral. En el caso de los primeros, la tasa de paro entre los profesionales de entre 16 y 19 años alcanzó el 56,15%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al primer trimestre del año. La situación tampoco es mucho mejor entre las mujeres. Representan el 68% del aumento del desempleo y sufren un 73% de parcialidad no deseada.



Fuente: EPA primer trimestre 2018

Lo que es evidente es que la recuperación económica está castigando a los jóvenes, cuya presencia en el mercado laboral lleva camino de reducirse a la

[7] Dinamarca, Francia y Alemania son los países donde las retribuciones salariales suman más de la mitad del PIB y donde los trabajadores tienen una mayor parte de la tarta, situándose Italia con el menor peso.

mitad en la década transcurrida entre el inicio de la crisis, a finales de 2007, y el "*milagro español*". La cifra de ocupados y ocupadas, entre 16 y 30 años, ha caído de 4,9 a 2,5 millones de personas, según la EPA, creciendo el número de parados de esas edades un 45%, de 728.000 a 1,06 millones de personas.

En esa década, se ha reducido la población que se encuentra en esas franjas de edad, pasando de 7,2 a 5,7 millones, así como el volumen de activos, que cayó de 5,6 a 3,6 millones. La reducción del empleo en esas franjas es mayor que la que se ha producido en el conjunto del mercado laboral español. Una tenencia que desprecia a la generación mejor formada de la historia del país y que provoca abandono del mercado laboral: *la emigración y los estudios*.

España pierde 20.000 jóvenes al año desde 2015, más de la mitad de ellos de entre 25 y 30 años. Después de un lustro con ese flujo, y que se traduce en fuga de talentos, se situó la cifra de emigrados por encima del 425.000 a principios del año 2017. Por otra parte, los que se quedan, especialmente hasta los 24 años, optan por prolongar o retomar los estudios a la espera *"mejores tiempos*". Otros 317.000, de esa edad, compaginan trabajo y estudios.

Las dificultades residen en que más de la mitad de los empleos se concentran en hostelería (903.000) y el comercio (515.000); que casi un tercio de los contratos no son de jornada completa (694.000); o que más de medio millón de ellos está subempleado, es decir, que ocupa un puesto que exige menos preparación que la que tiene.

Lo que está claro, también, es que la tasa de actividad de los y las jóvenes es mayor cuanto mayor es su nivel de estudios. De hecho, la EPA indica que el volumen de ocupación es netamente mayor entre las mujeres de menos de 30 años con estudios superiores, que entre los hombres de esa misa edad y formación[8].

La industria española: evolución y perspectivas

La industria manufacturera origina, en gran medida, la competitividad de un país a largo plazo. Tiene importantes repercusiones en otros sectores (aumento en la demanda final del resto de la economía) y representa una parte importante de innovación, lo que genera un aumento de la productividad. La deslocalización de la producción hacia otros países o la externalización de algunos servicios son algunos de los factores que explican la pérdida del peso de la industria, situación que se ha venido produciendo a partir de la década de los noventa del pasado siglo.

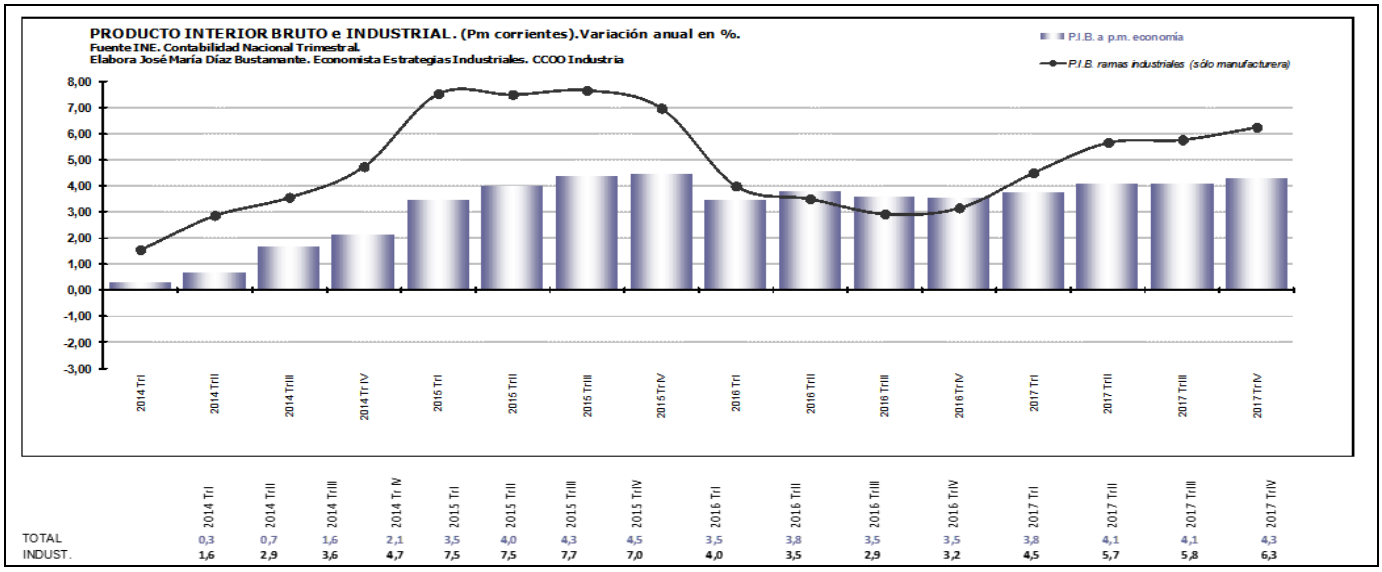
Actualmente, las empresas distribuyen sus operaciones en todo el mundo, desde el diseño del producto hasta la fabricación de las piezas, su ensamblaje y comercio. El surgimiento de las cadenas globales de valor ha detonado un fuerte aumento del flujo comercial de bienes intermedios y se prevé que siga

[8] El mercado español ocupa a 1,27 millones de veinteañeros y 1,18 de veinteañeras, casi dos tercios de los primeros sin carrera (480.000) y más de la mitad de ellas (630.000) con titulación universitaria.

creciendo. En este marco, España se comporta como un proveedor de producto intermedio, que se utiliza para fabricar algo en otro lugar, por lo que el valor añadido y el margen de rentabilidad no se queda en casa. Las empresas se comportan como una industria auxiliar; no exportan productos finales, que son los que deja margen. Esta debilidad de la economía se debe a la falta de innovación, de productos propios.

Además, los desenlaces provocados por el desarrollo del Brexit y la actitud del presidente de EEUU son factores que, ya de por sí, van a canalizar una fuente de incertidumbres para el desarrollo de la industria del continente, que se centran en los aranceles, la regulación y la deslocalización. Por lo que la UE debe consolidar y reforzar su base industrial mediante acciones conjuntas que empodere a la proyección de la industria europea como un elemento de referencia para el mercado mundial.

Desde la UE denunció la incertidumbre creada a sus empresas tras la amenaza de EEUU de aplicar tarifas a las importaciones de acero y aluminio, acompañado de similares medidas dirigidas al sector de automoción y otros, reclamando una "*exención permanente*" y, al mismo tiempo, no permitiría una negociación "*bajo amenaza*"[9].



Respecto al papel de España, en esta materia, es imprescindible mantener un alineamiento entre las políticas que impulsan las diferencias administraciones para conseguir la máxima efectividad. En la actualidad, únicamente Catalunya, Euskadi, País Valenciá y Andalucía cuentan con estrategias de política industrial basadas en el encaje con la estrategia Europa 2020, por lo que se requeriría que todas las acciones que puedan emprenderse vayan en la misma dirección que señala la agenda europea. Pero, al mismo tiempo y teniendo en cuenta el retraso de la industria española respecto a la situación de los países

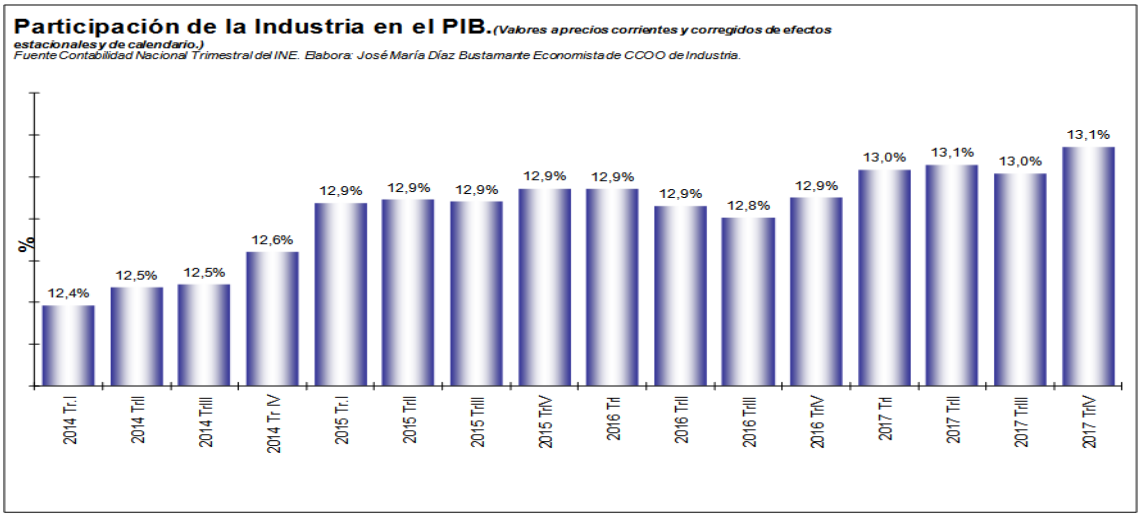
[9] EEUU pospuso, en mayo de 2018, un mes la imposición de aranceles al acero y al aluminio a los países de la UE, México y Canadá. Los polémicos aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio entraron en vigor el 23 de marzo del mismo año. La industria del acero propone a la UE que no debe ceder a las medidas comerciales unilaterales, debiendo respaldar soluciones multilaterales bajo el marco de la OMC.

de su entorno, se requiere que ese esfuerzo sea más intenso que el del resto de los países en el marco de las orientaciones comunitarias.

En el año 2017, la producción industrial, descontada la variación de precios, creció un 3%, comportándose de forma muy correlacionada con la evolución del PIB. Todas las familias de productos industriales experimentaron crecimiento positivo en ese año. Destacaron los bienes de consumo duradero, que crecieron un 5,6%, y los bienes intermedios, que lo hicieron a una tasa del 5,3%. En lo que llevamos de año 2018, la producción industrial pierde vigor, lastrada por el deterioro del componente de bienes de consumo, en contraste con los ritmos algo más dinámicos del de bienes de equipo. El IPI cae en el segundo trimestre del año, tras una subida destacada en el primero.

La industria creció, en 2017, un 3,6% por encima de la economía en términos interanuales, siendo los sectores más crecientes la inversión pública (20%), la automoción (9%) y el consumo de cemento (6%), así como las exportaciones de bienes (2,6%). Esta evolución más dinámica de la industria manufacturera se ha traducido en repunte del peso del sector en la economía, hasta alcanzar el 13,1% en el cuarto trimestre de 2017.

En España, la industria representa en torno al 16% del PIB (16,2% en 2016, teniendo en cuenta la energía y construcción), un par de décimas menos que en 2007, pero casi cuatro puntos menos que en 1997. Hace 20 años, en torno al 20% del PIB dependía del tejido industrial. Aunque la participación en el PIB ha vuelto a la que tenía en 2007, en términos de empleo todavía está muy lejos del volumen de entonces.



En 2017, se alcanzó la cifra de 198.911 empresas, un 1,6% más que en 2016. Estas 3.186 empresas nuevas suponen el 7% del crecimiento experimentado en el tejido empresarial español, pese a que las empresas industriales suponen un 6% del total, lo que redunda en el mayor dinamismo del sector respecto al conjunto de la economía. El número de empresas creció en todas las áreas, salvo en el caso de energía que, prácticamente, permaneció invariable con la baja de 13 de las 7.494 empresas contabilizadas en 2016.

En términos absolutos, en el último año, el área de más crecimiento es la agropecuaria, registrando un crecimiento en torno a 4.000 empresas, seguido del sector de bienes de consumo, en el que se han dado de alta 1.372 empresas. Si la comparación la efectuamos en función de los porcentajes, los de mayor crecimiento han sido la Industria Alimentaria y el sector de Defensa. Dentro de cada sector, la evolución del tejido empresarial del último año varió según la actividad concreta de la que se trate. Así, en Defensa, se cerraron empresas en los sectores de la TIC y de Armamento, en Eléctricas también; así como en Bienes de consumo y Componentes de auto, y con especial incidencia lo hicieron en Bienes de Equipo Mecánico y TIC.

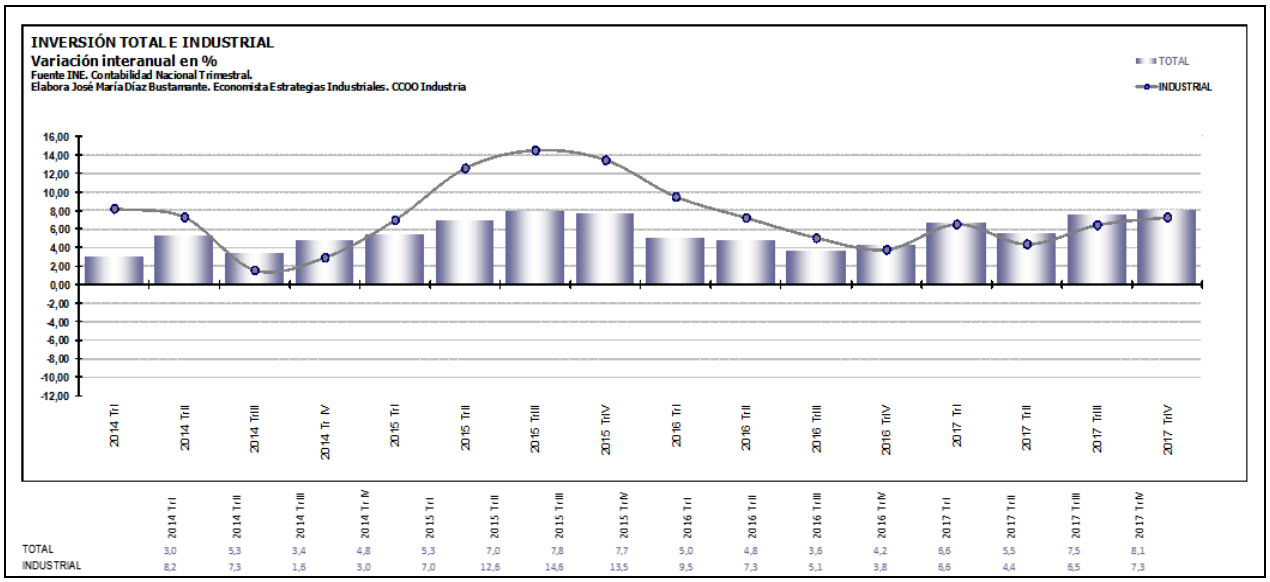
EMPRESAS CON ASALARIADOS CCOO INDUSTRIA.

Fuente: DIRCE. Elabora: JM Díaz Bustamante. Secrt. Estrategias Industriales CCOO Industria

	2013	2014	2015	2016	2017	2016-2017		2013-2017	
CAMPO	**108.297**	**103.046**	**110.833**	**114.546**	**118.532**	**3.986**	**3,5%**	**10.235**	**9,5%**
BEBIDAS Y TABACO	3.472	3.513	3.550	3.537	3.684	147	4,2%	212	6,1%
CÁRNICO	3.180	3.094	3.045	2.997	3.004	7	0,2%	-176	-5,5%
RESTO INDUSTRIA ALIMENTICIA	13.631	13.337	13.202	13.189	14.100	911	6,9%	469	3,4%
INDUSTRIA ALIMENTICIA	**20.283**	**19.944**	**19.797**	**19.723**	**20.788**	**1.065**	**5,4%**	**505**	**2,5%**
AEROESPACIAL	76	72	72	81	91	10	12,3%	15	19,7%
ARMAMENTO Y VEHÍCULOS	42	39	36	39	36	-3	-7,7%	-6	-14,3%
TIC	488	465	457	478	453	-25	-5,2%	-35	-7,2%
NAVAL	292	260	254	239	297	58	24,3%	5	1,7%
DEFENSA	**898**	**836**	**819**	**837**	**877**	**40**	**4,8%**	**-21**	**-2,3%**
ELÉCTRICAS	2.004	2.032	2.052	2.073	2.038	-35	-1,7%	34	1,7%
GAS PETRÓLEO Y AFINES	104	106	99	92	99	7	7,6%	-5	-4,8%
ESTACIONES DE SERVICIO	5.243	5.250	5.288	5.329	5.344	15	0,3%	101	1,9%
ENERGÍA	**7.351**	**7.388**	**7.439**	**7.494**	**7.481**	**-13**	**-0,2%**	**130**	**1,8%**
INDUSTRIA QUÍMICA	5.117	5.005	4.895	4.825	4.882	57	1,2%	-235	-4,6%
INDUSTRIA EXTRACTIVA	42	35	33	32	37	5	15,6%	-5	-11,9%
MINERÍA NO ENERGÉTICA	147	147	139	147	149	2	1,4%	2	1,4%
SIDERURGIA	1.352	1.296	1.127	1.084	1.214	130	12,0%	-138	-10,2%
MATERIALES NO FERROSOS	197	189	193	180	171	-9	-5,0%	-26	-13,2%
ESPECIALES Y FORJA	1.538	1.462	1.387	1.361	1.384	23	1,7%	-154	-10,0%
VIDRIO Y CERÁMICA	1.285	1.228	1.163	1.109	1.166	57	5,1%	-119	-9,3%
QUÍMICOFARMACEÚTICA	322	319	316	313	313	0	0,0%	-9	-2,8%
INDUSTRIA BÁSICA	**10.000**	**9.681**	**9.253**	**9.051**	**9.316**	**265**	**2,9%**	**-684**	**-6,8%**
GAMA BLANCA	192	175	174	154	157	3	1,9%	-35	-18,2%
OCIO Y DEPORTE	374	369	391	394	424	30	7,6%	50	13,4%
OPTICAS	3.084	3.166	3.076	3.100	3.168	68	2,2%	84	2,7%
BIENES DE CONSUMO	1.072	1.026	970	923	903	-20	-2,2%	-169	-15,8%
AUTO	37.214	36.956	36.937	37.355	38.085	730	2,0%	871	2,3%
COMPONENTES DE AUTO	1.971	1.925	1.880	1.872	1.848	-24	-1,3%	-123	-6,2%
PERFUMERÍA	812	813	799	806	833	27	3,3%	21	2,6%
TEXTIL Y MODA	11.366	10.885	10.292	10.285	10.843	558	5,4%	-523	-4,6%
BIENES DE CONSUMO	**56.085**	**55.315**	**54.519**	**54.889**	**56.261**	**1.372**	**2,5%**	**176**	**0,3%**
BBEE MECÁNICOS	21.344	20.689	20.393	20.275	19.921	-354	-1,7%	-1.423	-6,7%
MONTAJE Y MANTENIMIENTO	60.697	56.728	54.835	54.647	56.633	1.986	3,6%	-4.064	-6,7%
BBEE ELÉCTRICOS	1.530	1.451	1.420	1.369	1.375	6	0,4%	-155	-10,1%
TIC	12.842	13.408	13.964	14.525	13.767	-758	-5,2%	925	7,2%
BIENES DE EQUIPO	**96.413**	**92.276**	**90.612**	**90.816**	**91.696**	**880**	**1,0%**	**-4.717**	**-4,9%**
Total	**299.327**	**288.486**	**293.272**	**297.356**	**304.951**	**7.595**	**2,6%**	**5.624**	**1,9%**

Mientras, el tirón de la demanda se dejó notar en sectores como el de automoción, con el alta de concesionarios y talleres; en textil y moda; en el de montaje y mantenimiento; en Siderurgia; y en Naval, en la que particularmente se recupera mucha actividad como consecuencia de los contratos de construcción naval firmados.

Por su parte, la inversión industrial está convergiendo con la que presenta la economía en su conjunto (6,9%), como consecuencia de la recuperación de la actividad en la construcción. El cuarto trimestre de 2017 presenta un crecimiento de la inversión industrial del 7,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que cierra el año con un incremento total del 6,2% interanual, tasa muy similar a la de 2016.



Empleo en la industria

El promedio anual, correspondiente a los cuatro trimestres de la EPA de 2017, pone de manifiesto un incremento del 4,8% del número de ocupados en la industria manufacturera, al pasar de 2.284.200 a 2.393.400 (2.717.010 en 2007). Se abunda así en la senda de crecimiento que se venía observando desde 2013, año desde el que ha crecido un 13% (274.700 personas). Presenta un dinamismo más acusado que el conjunto del empleo de la economía española, en el que la cifra de personas ocupadas creció en un 2,6% en 2017 y un 9,8% desde 2013.

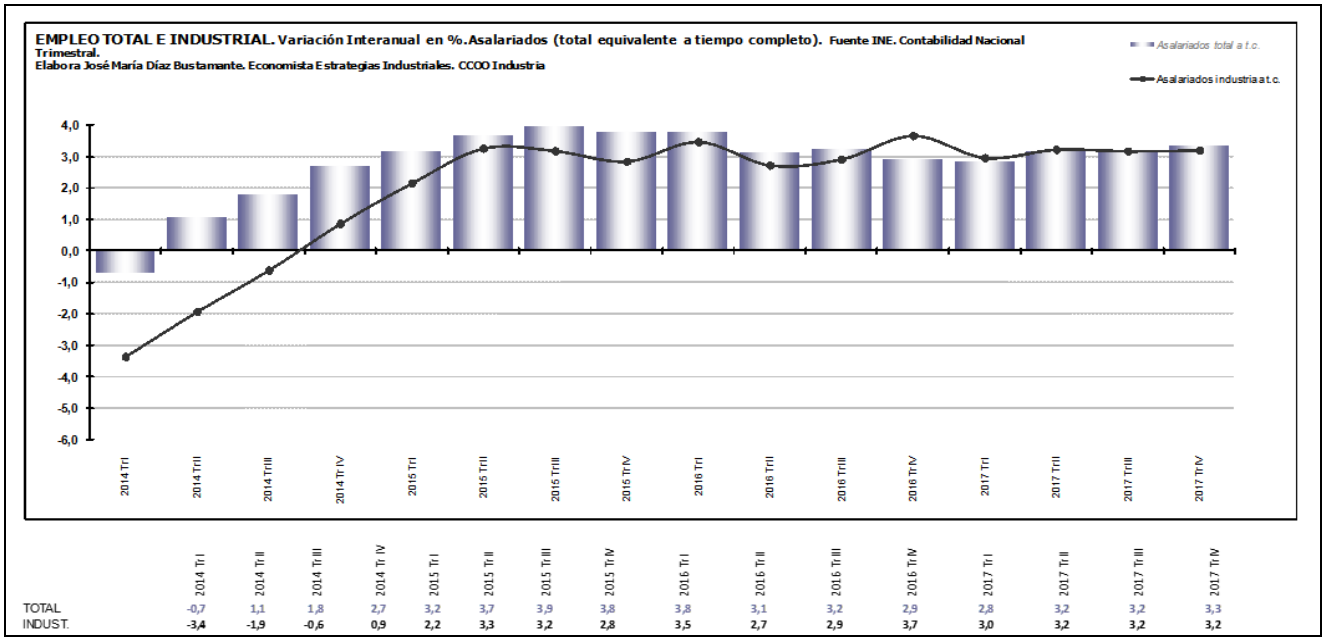
La pauta de crecimiento es similar a la que se ha presentado en otras épocas de recuperación. Así, por un lado, crece la tasa de asalarización, llegando a ser del 89,4%, alcanzando la población asalariada los 2.140.000 personas en 2017. Por otro, el empleo generado se caracteriza por su alta precariedad, ya que en torno al 22% de los asalariados son temporales en 2017 y muestra una senda acusadamente ascendente desde 2013. A la vez, el empleo a tiempo parcial se extiende en el sector y el 45% de los y las trabajadoras afectadas por contratos a tiempo parcial están descontentos con su situación.

Hay 2,5 millones de asalariados que dependen de la industria, un sector que sigue siendo decisivo en la economía nacional, pese a su paulatina terciarización. Que hace tiempo convirtió al sector de servicios en el primer generador de renta del país, con mucha diferencia. Según datos de la Seguridad Social, en torno al 15% de asalariados que hay en España se ganan el sueldo en una empresa industrial, tasa que alcanza el 30% en Navarra, el 27% en La Rioja y el 23% en Euskadi, Aragón y Castilla-La Mancha, constituyéndose en las cinco CCAA en las que el sector secundario tiene un mayor peso en sus respectivos mercados laborales.

Solo basta echar un vistazo al mapa económico español para comprobar el estratégico vínculo entre industrialización y riqueza. Aquellas regiones que

despuntaron en este sector y que siguen teniendo un tejido industrial sólido se cuentan, también, entre las autonomías con mejores datos de empleo y renta.

El último decenio, del 31 de diciembre de 2007 al mismo mes de 2017, deja un preocupante saldo en el sector secundario español: *441.425 asalariados menos y la pérdida de 36.643 empresas industriales*. En 2013, la industria tocó suelo. Desde entonces, está remontando como el resto de la economía española, pero lo está haciendo muy lentamente. En los cuatro últimos años, este sector ha ganado unas 2.000 empresas con asalariados, un 5% de las perdidas en la década, y, en el mismo período, el tejido industrial español creó 205.600 puestos de trabajo, lo que ha supuesto recuperar casi la tercera parte de los destruidos durante el sexenio de la crisis (647.000 se perdieron entre 2007 y 2013) y cerca del 47% de los empleos perdidos en la década.



Cada año se crean puestos de trabajo a mayor ritmo: 20.000 en el 2014, 55.000 en 2015, 60.000 en 2016 y 70.000 en 2017. Catalunya es la que más empleos tiene en este sector (429.000 al acabar 2017); la sigue el País Valenciá (246.000) y Andalucía. Esta comunidad solo por una cuestión de tamaño -territorial y poblacional-, no porque destaque como potencia industrial, ya que únicamente aporta el 10% del empleo total de esta comunidad, solo por detrás de Canarias y Baleares.

Pero, entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 se registraron 2,3 millones de contratos laborales correspondientes al sector industrial que, si se compara con los 100.900 empleos industriales generados, soporta una tasa de rotación de 22 contratos por cada persona durante los últimos doce meses. Por supuesto, en la raíz del problema destaca el hecho de que más del 90% de esos contratos fue temporal. El porcentaje de asalariadas con contrato temporal es del 24,4% y en el caso masculino es de 4,5 puntos menos. Esta actividad, junto a la de construcción no ha sido ajena a la debacle del empleo en el mes de agosto de 2018.

El desempleo industrial es el que disminuye con mayor dificultad, al presentar la tasa de variación anual en el número de personas desempleadas más reducida de todos los sectores. El tímido dinamismo del sector industrial, que genera precariedad y una absorción muy lenta del desempleo, derivan de la continuada indefinición de la política industrial y de la de igualdad del anterior Gobierno.

Por género, se aprecia mayor dinamismo en la generación de empleo manufacturero femenino, que creció un 7,2% en 2017 (15,4% desde 2013), frente al 4% en el caso masculino (12,2% desde 2013). Sin embargo, también es más acusada la precariedad a la que están sometidas las trabajadoras manufactureras, puesto que la temporalidad afecta al 23,2% de las asalariadas, más de dos puntos por encima de la que soportan sus compañeros. Por su parte, también son más las asalariadas afectadas por el trabajo a tiempo parcial, puesto que suponen el 12,9% de las mujeres, en tanto que en los hombres afecta al 2,6%.

EMPLEO ASALARIADO CCOO INDUSTRIA. PROMEDIO ANUAL

	EMPLEO TOTAL							EMPLEO TEMPORAL							% TEMPORAL	
	2013	2016	2017	2016-2017		2013-2017		2013	2016	2017	2016-2017		2013-2017		2013	2017
AGRO	323.544	388.542	408.818	20.276	5,2%	85.274	26,4%	220.251	271.333	274.052	2.720	1,0%	53.801	24,4%	68,1%	67,0%
FORESTAL	20.235	21.429	24.675	3.246	15,1%	4.440	21,9%	7.271	7.385	8.009	624	8,4%	738	10,2%	35,9%	32,5%
GANADERÍA	39.618	43.158	51.067	7.909	18,3%	11.449	28,9%	10.108	9.093	14.334	5.241	57,6%	4.226	41,8%	25,5%	28,1%
CAMPO	**383.397**	**453.128**	**484.559**	**31.431**	**6,9%**	**101.162**	**26,4%**	**237.629**	**287.811**	**296.395**	**8.584**	**3,0%**	**58.766**	**24,7%**	**62,0%**	**61,2%**
BEBIDAS Y TABACO	53.721	55.100	53.934	-1.167	-2,1%	212	0,4%	7.107	8.668	11.655	2.987	34,5%	4.548	64,0%	13,2%	21,6%
CÁRNICO	84.787	106.792	108.354	1.562	1,5%	23.567	27,8%	17.544	23.646	26.713	3.067	13,0%	9.169	52,3%	20,7%	24,7%
RESTO INDUSTRIA ALIMENTACIÓN	254.923	273.124	291.418	18.294	6,7%	36.495	14,3%	53.380	74.893	76.911	2.018	2,7%	23.531	44,1%	20,9%	26,4%
ALIMENTACIÓN	**393.431**	**435.016**	**453.705**	**18.690**	**4,3%**	**60.274**	**15,3%**	**78.031**	**107.206**	**115.279**	**8.073**	**7,5%**	**37.248**	**47,7%**	**19,8%**	**25,4%**
AEROESPACIAL	35.001	29.901	33.254	3.354	11,2%	-1.747	-5,0%	3.945	6.408	6.353	-55	-0,9%	2.408	61,0%	11,3%	19,1%
ARMAMENTO Y VEHÍCULOS	3.370	2.354	2.857	503	21,4%	-513	-15,2%	315	824	803	-21	-2,6%	488	155,1%	9,3%	28,1%
TIC DEFENSA	5.384	5.143	6.669	1.527	29,7%	1.285	23,9%	839	652	828	176	27,0%	-11	-1,3%	15,6%	12,4%
NAVAL	15.166	16.743	17.732	989	5,9%	2.566	16,9%	3.543	5.627	6.183	556	9,9%	2.640	74,5%	23,4%	34,9%
DEFENSA	**58.921**	**54.140**	**60.512**	**6.372**	**11,8%**	**1.591**	**2,7%**	**8.642**	**13.511**	**14.167**	**656**	**4,9%**	**5.525**	**63,9%**	**14,7%**	**23,4%**
ELÉCTRICAS	64.524	66.121	66.409	289	0,4%	1.885	2,9%	9.857	8.150	10.222	2.073	25,4%	365	3,7%	15,3%	15,4%
GAS PETRÓLEO Y AFINES	32.003	30.850	33.668	2.818	9,1%	1.665	5,2%	5.677	6.709	6.850	141	2,1%	1.173	20,7%	17,7%	20,3%
ESTACIONES DE SERVICIO	49.146	49.367	51.992	2.625	5,3%	2.846	5,8%	9.842	9.744	10.442	698	7,2%	600	6,1%	20,0%	20,1%
ENERGÍA	**145.673**	**146.337**	**152.068**	**5.731**	**3,9%**	**6.396**	**4,4%**	**25.376**	**24.602**	**27.514**	**2.912**	**11,8%**	**2.138**	**8,4%**	**17,4%**	**18,1%**
INDUSTRIA QUÍMICA	127.036	137.742	152.224	14.482	10,5%	25.188	19,8%	16.255	20.272	25.950	5.678	28,0%	9.695	59,6%	12,8%	17,0%
INDUSTRIA EXTRACTIVA	4.325	3.407	3.366	-41	-1,2%	-959	-22,2%	191	123	46	-77	-62,8%	-146	-76,1%	4,4%	1,4%
MINERÍA NO ENERGÉTICA	6.792	8.446	8.940	494	5,8%	2.148	31,6%	1.489	977	1.523	546	55,8%	34	2,3%	21,9%	17,0%
SIDERURGIA	71.566	74.269	81.848	7.579	10,2%	10.282	14,4%	13.081	12.072	14.639	2.567	21,3%	1.559	11,9%	18,3%	17,9%
MATERIALES NO FERROSOS	10.008	9.802	13.796	3.994	40,7%	3.788	37,8%	2.455	2.482	2.805	324	13,0%	351	14,3%	24,5%	20,3%
ESPECIALES Y FORJA	14.424	18.061	15.920	-2.142	-11,9%	1.496	10,4%	2.105	2.709	3.418	710	26,2%	1.314	62,4%	14,6%	21,5%
VIDRIO Y CERÁMICA	18.823	25.053	21.747	-3.306	-13,2%	2.924	15,5%	3.694	4.194	3.649	-545	-13,0%	-45	-1,2%	19,6%	16,8%
QUÍMICOFARMACEÚTICA	69.635	69.412	71.920	2.508	3,6%	2.285	3,3%	9.542	12.777	9.534	-3.243	-25,4%	-8	-0,1%	13,7%	13,3%
INDUSTRIA BÁSICA	**322.609**	**346.191**	**369.760**	**23.569**	**6,8%**	**47.151**	**14,6%**	**48.811**	**55.605**	**61.564**	**5.959**	**10,7%**	**12.753**	**26,1%**	**15,1%**	**16,6%**
GAMA BLANCA	14.163	13.467	13.542	76	0,6%	-620	-4,4%	1.814	2.681	2.815	134	5,0%	1.001	55,2%	12,8%	20,8%
OCIO Y DEPORTE	5.960	5.643	6.794	1.151	20,4%	834	14,0%	625	1.015	2.056	1.041	102,6%	1.431	229,1%	10,5%	30,3%
ÓPTICAS	6.143	7.072	8.107	1.035	14,6%	1.964	32,0%	275	2.006	821	-1.185	-59,1%	547	199,2%	4,5%	10,1%
BIENES DE CONSUMO	4.982	5.687	4.820	-867	-15,2%	-162	-3,3%	787	284	313	30	10,5%	-473	-60,2%	15,8%	6,5%
AUTO	272.309	310.373	314.788	4.415	1,4%	42.480	15,6%	36.419	59.861	55.830	-4.031	-6,7%	19.411	53,3%	13,4%	17,7%
COMPONENTES DE AUTO	126.944	159.715	153.860	-5.855	-3,7%	26.916	21,2%	19.350	38.240	38.497	257	0,7%	19.148	99,0%	15,2%	25,0%
PERFUMERÍA	22.599	36.895	41.104	4.210	11,4%	18.505	81,9%	3.370	5.968	6.568	600	10,1%	3.199	94,9%	14,9%	16,0%
TEXTIL Y MODA	111.164	129.093	144.761	15.668	12,1%	33.597	30,2%	25.279	34.510	34.396	-115	-0,3%	9.116	36,1%	22,7%	23,8%
BIENES DE CONSUMO	**564.263**	**667.943**	**687.775**	**19.832**	**3,0%**	**123.512**	**21,9%**	**87.917**	**144.564**	**141.296**	**-3.268**	**-2,3%**	**53.379**	**60,7%**	**15,6%**	**20,5%**
BBEE MECÁNICOS	222.507	244.714	255.018	10.304	4,2%	32.511	14,6%	34.849	42.583	50.116	7.533	17,7%	15.267	43,8%	15,7%	19,7%
MONTAJE Y MANTENIMIENTO	333.021	359.528	369.424	9.895	2,8%	36.403	10,9%	70.839	95.691	99.460	3.769	3,9%	28.621	40,4%	21,3%	26,9%
BBEE ELÉCTRICOS	53.633	43.551	51.488	7.937	18,2%	-2.146	-4,0%	6.067	9.766	10.709	943	9,7%	4.643	76,5%	11,3%	20,8%
TIC	69.156	66.616	77.527	10.912	16,4%	8.371	12,1%	11.497	13.130	12.885	-245	-1,9%	1.388	12,1%	16,6%	16,6%
BIENES DE EQUIPO	**678.317**	**714.408**	**753.456**	**39.048**	**5,5%**	**75.139**	**11,1%**	**123.251**	**161.169**	**173.169**	**12.000**	**7,4%**	**49.918**	**40,5%**	**18,2%**	**23,0%**
TOTAL ÁMBITO FEDERAL	**2.546.611**	**2.817.164**	**2.961.835**	**144.672**	**5,1%**	**415.225**	**16,3%**	**609.656**	**794.467**	**829.383**	**34.915**	**4,4%**	**219.727**	**36,0%**	**23,9%**	**28,0%**

Fuente: EPA. Los datos inferiores a 5.000 adolecen de gran margen de error Elabora: JM Díaz Bustamante. Economista CCOO Industria

También es notable la relación que existe entre edad y precariedad, puesto que la precariedad se agudiza cuanto más joven es la persona que trabaja en el

sector manufacturero. Entre la población asalariada, de menos de 25 años, solo tienen contrato indefinido el 30%, es decir, la precariedad se eleva hasta el 70%. Este porcentaje de personas afectadas por contrato temporal va disminuyendo, conforme se incrementa la edad. No obstante, entre la población del sector que tiene menos de 35 años, la temporalidad afecta al 41,4% del total, precariedad que se incrementa cada año.

El empleo femenino se mostró más dinámico en el segundo trimestre de 2018, presentando una tasa de incremento anual del 8,4%, frente al 2,8% que experimenta el empleo masculino. Así, el segundo trimestre de 2018 se cierra con una población asalariada industrial cifrada en 653.800 mujeres y 1.819.400 hombres.

En el marco de los costes laborales por hora trabajada en el sector industrial, se situaron en 23,3 euros en España, en 2017. Cifra un 15% inferior a los 27,4 euros del promedio de la UE-28 y un 30% más baja que la media de la eurozona (33,4 euros), según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), a partir de datos de Eurostat. Los mayores costes por hora trabajada en la industria corresponden a Bélgica y Dinamarca, con casi 45 euros, le sigue Alemania (40,2), Francia (38,8), Suecia (38,5), Austria (37,2), Países Bajos (36,8), Finlandia (36,3), Irlanda (32,9), Luxemburgo (32,5), Italia (27,8) y R. Unido (24,2 euros), todos ellos con costes superiores a los de España, que se sitúa aproximadamente a mitad de la tabla.

Por otra parte, menos del 10% de las operaciones industriales en España generan valor añadido, mientras que la mayoría de los procesos en las empresas, desde los movimientos internos dentro de las plantas de producción hasta los controles de calidad, pueden considerarse un derroche que resta competitividad.

La decisión estratégica, enfocada a ganar mercado; una visión externa que ayude a modificar la cultura corporativa; y un liderazgo comprometido que tenga en cuenta la visión de los y las trabajadoras que participan en los procesos, son elementos clave para empezar a reducir el derroche en las empresas.

Por su parte, el comercio exterior ha crecido en todos los sectores industriales, tanto la exportación como la importación. El que presenta mayor dinamismo son los de elaboración de semimanufacturas, en el que tanto las importaciones como las exportaciones crecen en porcentajes de dos dígitos, en tanto que el que menos dinamismo presenta son los sectores que fabrican manufacturas de consumo. En cualquier caso, se vuelve a presentar la pauta de crecimiento de nuestra economía en la que en momentos de expansión del ciclo el saldo del comercio exterior aporta poco, puesto que el déficit se acrecienta, al crecer las importaciones más que las exportaciones[10].

[10] Según el ICEX, se cierra el año con un déficit de casi 52.000 millones, un 37% más que en 2016, 14.000 millones de déficit más que en dicho año.

Perspectivas para el futuro del empleo en la industria

En algunos países emergentes se viene produciendo un salto sin precedentes; las economías avanzan desde la agricultura hacia el sector servicios, sin pasar por la industria. De esta forma, se abunda en la continua pérdida de peso del empleo en el sector manufacturero.

En los países avanzados, el porcentaje de empleo en la industria lleva alrededor de dos décadas cayendo, pero no siempre supone una reducción del peso en la economía o en la producción del sector manufacturero. Es un sector muy extensivo en factor capital (maquinaria, tecnología, plantas de producción), por lo que los avances de estas herramientas están expulsando (o sustituyendo) al factor trabajo. Sin embargo, la producción real del sector industrial en países como Alemania o EEUU se mantienen relativamente constante desde 1950. Es decir, hay menos empleos en el sector, pero la producción de bienes sigue siendo similar.

El 23,1% del empleo mundial se ubicaba en la industria en el año 2007. En 2017 se redujo hasta los 22,4%, después de superar los datos de 2007 en 2013 (23,4%). Desde entonces se ha acelerado la caída. El 43,9% lo absorbían los servicios hace diez años y el 51,1% en 2017, en un proceso de crecimiento que no parado en los últimos 40 años. Al contrario que el sector primario, que representa el 26,5% del total del empleo mundial en 2017, casi siete puntos menos que hace diez años y refleja una caída acelerada desde el pasado siglo.

En general, el empleo en la industria manufacturera, en relación con el empleo total y la cantidad de puestos dentro de dicha industria, están disminuyendo en los países de alto ingreso. En promedio, independientemente de sus ingresos, los países tienen actualmente menos participación que antes en la industria manufacturera y alcanzan los niveles máximos de empleo y de valor agregado en contextos de menores ingresos que en las décadas anteriores.

Otro desequilibrio que se produce, con el declive del empleo en la industria, es el de la desigualdad de ingresos y el crecimiento económico. Preocupa que un sector industrial más pequeño implique un crecimiento económico más lento y la escasez de empleos de bajo cualificación bien remunerados, lo que podría contribuir a la desigualdad. Algunas ramas del sector servicios (transporte, telecos y los servicios financieros), presentan grandes tasas de crecimiento y de productividad por hora trabajada. El sector servicios puede servir de puente, al igual que lo ha hecho la industria, para que los países en desarrollo converjan con los avanzados.

El nivel de desigualdad en la industria es menor que el de los servicios, pero el factor más importante es que el incremento de la desigualdad en las economías avanzadas ha sido el aumento de la diferencia de ingresos en todos los sectores, mucho más que la disminución del peso del empleo en la industria. Resulta evidente que las perspectivas de empleo en el sector manufacturero disminuyen a medida que los ingresos superan cierto nivel, las industrias de alta tecnología podrían crear un gran número de trabajos de servicios relacionados-con un salario por lo general comparable-, que podrían

contrarrestar la reducción laboral en las manufacturas. Aunque, la desaparición de empleos puede tener consecuencias considerables para ciertas personas y sus regiones, especialmente en las que han desarrollado importantes centros industriales.

Las inversiones de las empresas en intangibles, y en conocimiento, han crecido en los últimos años de manera muy significativa. Y es que, actualmente, el conocimiento es un elemento fundamental para la creación de valor y de riqueza. En este sentido, la economía ha sufrido una transformación que ha acelerado la necesidad de digitalizarse, es decir, de incorporar a los procesos productivos la tecnología digital necesaria para mejorarlos, hacerlos más rentables y rápidos y, por tanto, hacer las economías más competitivas.

Este fenómeno es el que ya se empieza a conocer como la cuarta revolución industrial. Este proceso de digitalización está afectando de manera muy significativa a los procesos industriales. En este sentido, el Consejo Europeo, en sus reuniones de mayo y noviembre del pasado año, adoptó conclusiones relacionadas con la necesidad de que las empresas se centren en el desarrollo innovador y en la asimilación de tendencias clave orientadas al futuro, "*como la internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, los macrodatos y las plataformas, los sistemas autónomos y conectados, el 5G, la impresión 3D, la normalización, la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la cadena de bloques*".

En este marco, la política industrial debe tener un papel clave en las políticas públicas de los gobiernos para garantizar la competitividad industrial del territorio y la creación de empleo estable y de calidad, vinculado a la industria, sobre todo en un momento caracterizado por los cambios. Y es que los países con un tejido industrial fuerte y competitivo presentan balanzas comerciales más equilibradas, tienen más fortaleza en los momentos de crisis económica y ayudan a combatir los efectos de la división internacional del trabajo.

En este cambio de paradigma, desde el punto de vista productivo, no solo hay que transformar y digitalizar las empresas, sino hacer lo mismo en el territorio. Y es que, si se quiere tener una industria digitalizada necesita un territorio inteligente y digitalizado, con infraestructuras que puedan acompañar esta revolución tecnológica y encajarla en el territorio. En este sentido, las obras del corredor Mediterráneo son totalmente indispensables, así como la dotación de banda ancha en esta construcción de territorios conectados e inteligentes.

La industria 4.0 es más competitiva y mejora las condiciones de trabajo en términos de salud laboral, con la liberación de actividades peligrosas o repetitivas, aumenta las posibilidades de cooperación y autonomía entre las plantillas y genera más flexibilidad en la organización del trabajo. También presenta retos en cuestiones como la intensificación y la aceleración de los ritmos de trabajo o la mayor flexibilidad y disponibilidad horaria de los trabajadores y las trabajadoras, que tienen efectos negativos en términos de estrés o de salud mental de las personas que los padecen. Cuestiones como los nuevos modelos de negocio o la relación a través de plataformas en el mercado de trabajo y sus efectos sobre el trabajo presentan dudas, ya que

dificultan la acción colectiva a través de los sindicatos. Además de las dudas sobre la pérdida de empleo que incorpora su desarrollo.

La formación es otra de las necesidades que presenta este proceso de digitalización. En la actualidad, hay que impulsar una formación profesional en alternancia y dual, con diálogo social y estándares de calidad para favorecer la transición escuela-trabajo y el empleo de calidad. Se deben fomentar las vocaciones de las profesiones industriales, especialmente entre las mujeres; la competencia digital y el emprendimiento; así como impulsar un modelo universitario basado en la excelencia y la internacionalización.

En consecuencia, es necesario un futuro industrial que sea competitivo por la vía de la innovación y el valor añadido, que genere empleo estable y de calidad, que favorezca una mayor homogeneidad social en términos de renta. Este proceso de digitalización debe ir acompañado de la apuesta por sectores industriales vinculados al fomento de las energías renovables, la economía circular o la apuesta por unas nuevas industrias de la construcción que tengan como base la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación de nuestros pueblos y ciudades[11].

Industria y Presupuestos Generales del Estado

La dotación presupuestaria de 2018 crece un 3,5%, respecto a 2017. Los capítulos de mayor incidencia en dicho crecimiento son los correspondientes a pensiones y a Seguridad Social. Entre las actuaciones económicas contempladas, son las medidas destinadas al sector agropecuario las que copan el mayor porcentaje del gasto previsto, con el 25,3%. Le sigue la dotación a la I+D+i, con el 23,8%, y después la Industria y la Energía, con el 19,4% del gasto dedicando a la actuación económica.

Para el sector agropecuario se diseñan políticas teniendo en cuenta las siguientes prioridades:

- Desarrollo Rural Sostenible, siguiendo las pautas marcadas por el reglamento CE 1305/2013.
- Agroalimentación, donde el objetivo fundamental es orientar las producciones hacia las nuevas demandas de la sociedad y a la actual formulación de la PAC.
- Regadíos.
- Medio marino y pesca. En esta materia, se pretende hacer compatible la política de conservación de la biodiversidad con la política de aprovechamiento pesquero.
- Prevención de riesgos.
- Regulación de los mercados agrarios, a la que se destinará la mayor parte de los fondos destinados al sector. El objetivo fundamental es

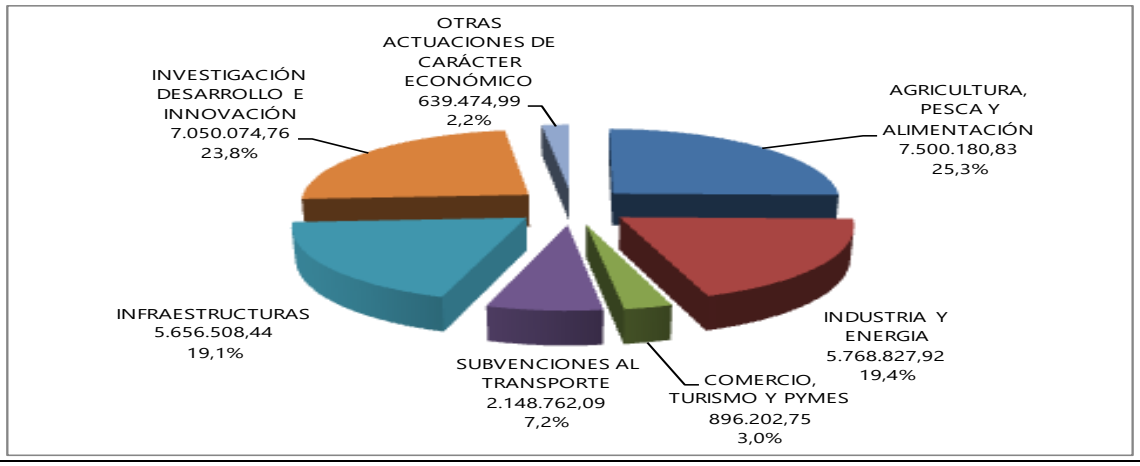
[11] Carlos del Barrio. Secretario de políticas sectoriales y sostenibilidad de CCOO de Catalunya. El Periódico, lunes 28/05/2018.

garantizar una renta adecuada a los sectores productivos y un precio no excesivo para los consumidores finales.

En actuaciones de política industrial y energética, la dotación presupuestaria crece un 6,2%. De todas formas, como ya estamos acostumbrados, el 65% tiene como destinatario las empresas eléctricas.

Se establece, como objetivo en materia de política industrial, aumentar el peso de la industria en la economía, de acuerdo con la senda recogida a nivel europeo en la estrategia 2020, donde figura un escenario en el que la industria representa el 20% del PIB. A través de esta política se debe reindustrializar la economía con el desarrollo y potenciación de los sectores tradicionales y transformar el tejido industrial para adaptarlo a un nuevo contexto, marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales, la digitalización y por una creciente competencia internacional. Además, se reconoce la necesidad de incrementar el tamaño de las empresas.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ACTUACIONES ECONÓMICAS 2018



En el ámbito de la política energética, los PGE 2018 establecen, respecto a sus objetivos generales, que deben ser la seguridad en el suministro energético, la protección del medio ambiente y unos precios competitivos para los consumidores. No obstante, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

El programa de desarrollo industrial ha crecido un 136%. La mayoría se han destinado a la financiación de préstamos al sector privado para el plan RENOVE de Bienes de Equipo. Esta es la partida más importante de este programa en 2018 y las ayudas están destinadas a las empresas industriales que adquieran e instalen en sus líneas productivas bienes de equipo que den lugar a una mejora tecnológica de sus procesos productivos.

En la memoria del programa se puede leer que tiene como objetivo fundamental facilitar a la industria las condiciones necesarias para desarrollar y materializar su potencial competitivo. Las líneas de actuación se dirigen a estimular el desarrollo y la producción de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y

medioambiental. Con esta finalidad, se estimula el acceso a los vehículos propulsado por energías alternativas para lo que se destinan 8,84 Millones, como en el año 2017.

El programa de reconversión y reestructuración es el segundo en dotación, después del de normativa y desarrollo energético. Se orienta, por una parte, a sectores en crisis sometidos a procesos de ajuste y adaptación al nuevo entorno competitivo internacional, como es el caso del sector naval, y, por otra, a la realización de actuaciones específicas de impulso al desarrollo industrial, para estimular la generación y consolidación de tejido industrial, de manera que contribuya a la mayor creación posible de valor añadido, se amplíe nuestra base exportadora y, como consecuencia, se genere crecimiento y empleo. En este último ámbito se actúa apoyando proyectos realizados por empresas del sector industrial manufacturero cuyo objetivo sea la inversión industrial moderna y competitiva, favoreciendo la migración de actividades y capacidades desde sectores maduros a otros de fuerte demanda y rápido crecimiento.

Se continúa apoyando al sector naval, si bien con una reducción financiera, instrumentada en la compensación de intereses de préstamos para la construcción naval. Por otra parte, el programa estimula iniciativas que incorporen tecnologías avanzadas en sus productos y procesos, generen empleo cualificado con la mayor aportación posible de valor añadido y, en definitiva, contribuyan a aumentar nuestra base exportadora y la presencia de nuestros productos industriales en otros mercados. Los apoyos financieros se prestan a través de las siguientes tipologías:

- Creación de establecimientos industriales.
- Traslado de establecimientos industriales.
- Ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros de producción existentes, a través de la implantación de nuevas líneas de producción.
- Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes.

La política de I+D+i industrial absorbe el 27,3% de la dotación presupuestada en 2018. No obstante, reconoce que, en comparación con nuestros socios europeos, España presenta un bajo nivel de inversión en esta materia. Según el último dato que baraja, supuso el 1,19% del PIB, mientras que la media en la UE es del 2,03%, aunque en países como Suecia alcanza el 3,25% y en Alemania el 2,94%. En una desagregación del análisis demuestra cómo esta diferencia, en contra de nuestra economía, se debe a la menor inversión del sector privado en España. En dicho contexto, el objetivo que se propone es que se alcance el 2% del PIB en 2020, frente al 3% del objetivo europeo.

Se produjo una fortísima reducción del presupuesto para I+D+i dentro de los PGE. Así, se pasó de los más de 9.600 millones euros en 2009 a poco más de 6.500 millones en 2017, lo que supuso una reducción de una tercera parte, y ello sin tener en cuenta el efecto de la inflación que naturalmente reduce la capacidad de compra. Esta reducción no fue solo debida a la crisis, porque el

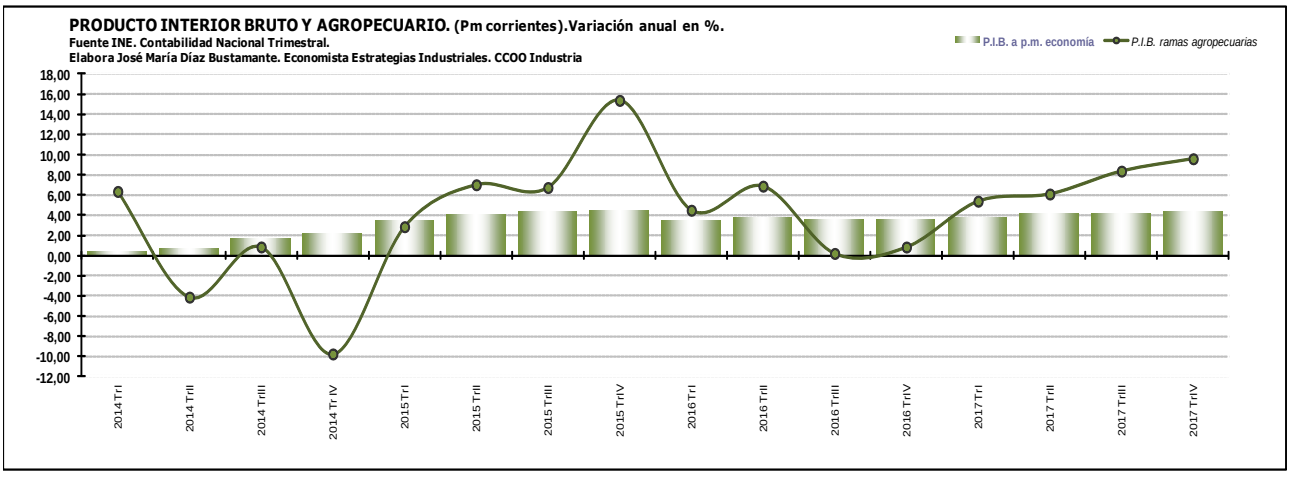
descenso de la partida de I+D+i fue mayor que la que tuvo lugar para el conjunto de los presupuestos. Mientras que su ejecución supuso entorno al 70% de lo aprobado y fueron descendiendo de manera constante hasta apenas alcanzar el 30% en 2017, lo que ha supuesto que incluso la UE haya hecho una advertencia pública sobre el particular.

El gasto en I+D sobre el PIB ha pasado de cerca de 1,4% a menos del 1,2 % en los años más recientes, mientras que el número de empresas innovadoras ha descendido considerablemente, trayendo aparejada también una caída de los gastos en innovación.

En definitiva, podemos resaltar en los PGE adoptados, que nos volvemos a enfrentar a un presupuesto lastrado por la compensación económica a las empresas eléctricas; en materia energética se introducen líneas de financiación de 300 millones para el impulso a la eficiencia energética y apoyo a las energías renovables; la dotación a la I+D+i crece un 8,4%, no obstante, el gasto en esta materia sigue estando por debajo de la media europea.

El sector agropecuario: un sector que requiere apoyo

Se trata de un sector que está sometido a cambios que vienen provocados por motivos naturales y por motivos sociales, y que hay que hacerlos compatible para garantizar que sea sostenible, desde el punto de vista de su conservación y comercial, consiguiendo que los recursos sean duraderos en el tiempo. El sector se enfrenta a retos importantes que deberán ser abordados a corto y medio plazo.



	2014 Tri	2014 TriII	2014 TriIII	2014 Tri IV	2015 Tri	2015 TriII	2015 TriIII	2015 TriV	2016 Tri	2016 TriII	2016 TriIII	2016 TriV	2017 Tri	2017 TriII	2017 TriIII	2017 TriV
TOTAL	0,3	0,7	1,6	2,1	3,5	4,0	4,3	4,5	3,5	3,8	3,5	3,5	3,8	4,1	4,1	4,3
AGRO	6,4	-4,1	0,9	-9,7	2,9	7,0	6,7	15,4	4,5	6,9	0,2	0,9	5,4	6,1	8,4	9,6

Si bien la crisis, en su eclosión, también le afectó, según las cuentas económicas de la agricultura[12], mostró signos de recuperación muy tempranos, entrando en esta dinámica en 2010, con un crecimiento del valor efectivo de la

[12]Estadística publicada por el MAPAMA Cuentas Económicas de la Agricultura (Renta Agraria: Macromagnitudes Agrarias)

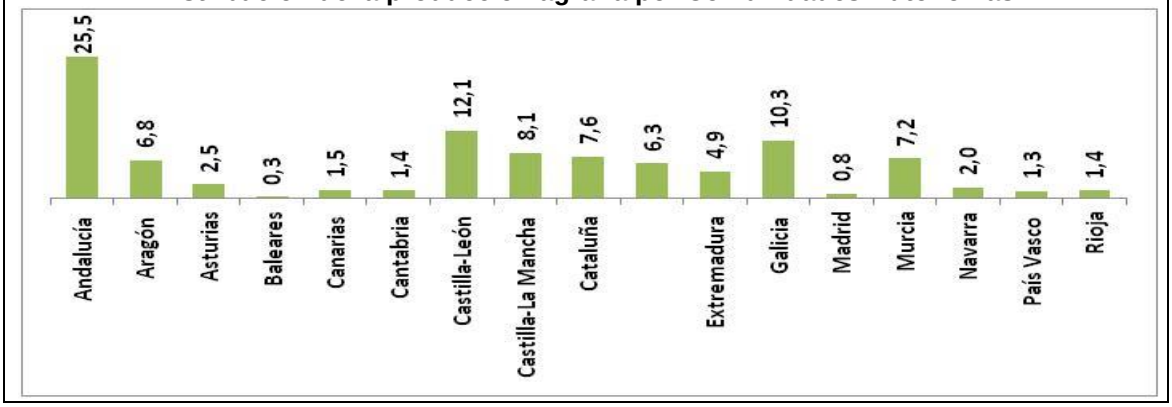
producción a tasas muy intensas, Así, cerró el período 2008-2017 con un incremento del valor de la producción en un 15% en el período. La evolución del producto agropecuario indica claramente la expansión de la actividad económica en el sector.

Durante el último trimestre de 2017 creció un 9,6%, lo que hizo que alcanzara, según la contabilidad nacional trimestral del INE, la cantidad de casi 30.200 millones de euros (el 2,6% del PIB). Con esta evolución, la producción de las ramas agropecuarias presenta un crecimiento total, en 2017, del 7,4%, el más elevado de todos los sectores de nuestra economía.

En la producción del sector prevalecen los productos vegetales, que suponen el 61,4% del total, distribución que prácticamente no ha variado respecto a la que presentaba en 2008. La producción animal representa el 35% de la producción sectorial y un conjunto de actividades, que no se pueden enmarcar en la producción agroforestal rigurosamente, que pesan un 3,6% del total.

A nivel territorial, la producción agraria española presenta determinada concentración en Andalucía, Castilla y León, y Galicia, con el 47,9% de la producción del sector agrario español, alcanzando el 89% si le añadimos Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, País Valenciá y Región de Murcia y Extremadura; todas ellas comunidades que aportan el 5% como mínimo a la producción total del sector.

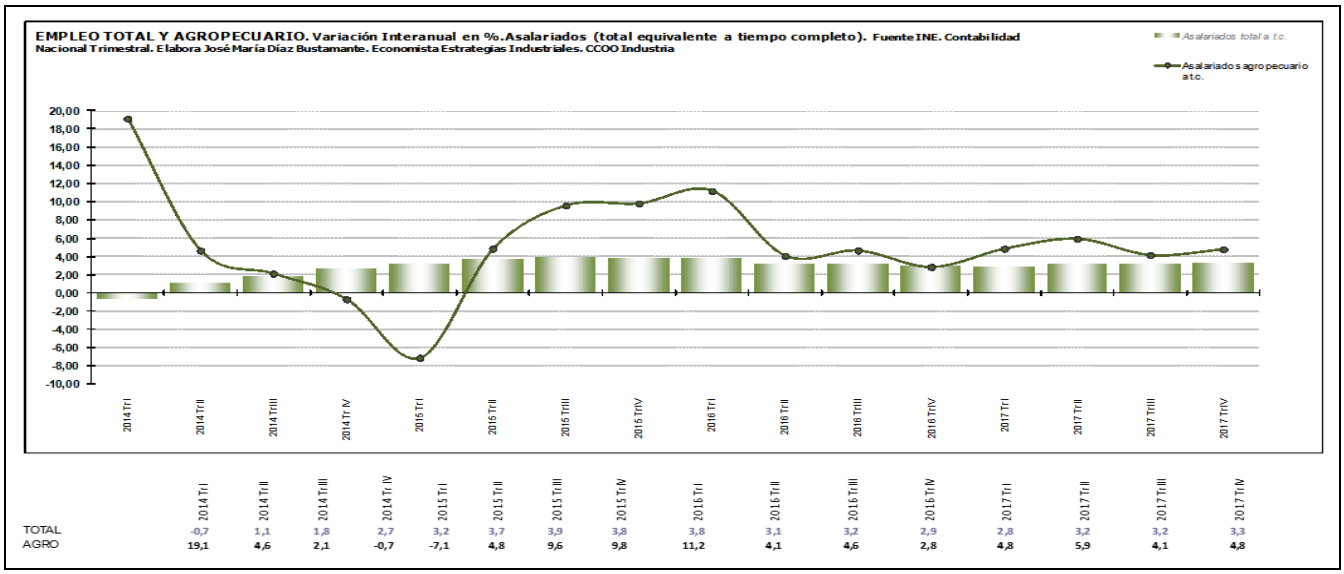
Distribución de la producción agraria por Comunidades Autónomas



El crecimiento de la actividad productiva tuvo su reflejo en la evolución del empleo agrario, que creció en 2017 un 3,7% en conjunto, aunque el asalariado experimentó mayor dinamismo, con una tasa del 4,9% en el volumen de empleo equivalente a tiempo completo.

Este sector ha sufrido una caída en el empleo, entre 2008 y 2016, de más de nueve puntos porcentuales, pasando de 861.598 personas empleadas en el sector en 2008 a 822.500 en el segundo trimestre de 2018. De ellos, el 77% son hombres y el 23% mujeres. En el año 2008, ellos eran el 72% y ellas el 28%. Este volumen de empleo supone una caída del 1,2% respecto al mismo periodo del año 2017. Al mismo tiempo, la cifra de personas paradas supone que el colectivo de trabajadores y trabajadoras agrarias en desempleo ha descendido un 9,5% en el último año. Se puede hablar, por lo tanto, de un cambio en el ritmo de variación del paro agrario, constatándose una

aceleración en las tasas de disminución del desempleo. Es uno de los que han registrado una mayor reducción porcentual, superando solo a la construcción.

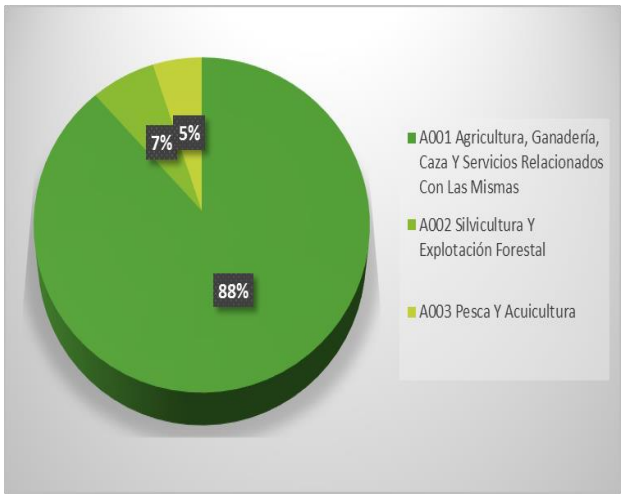


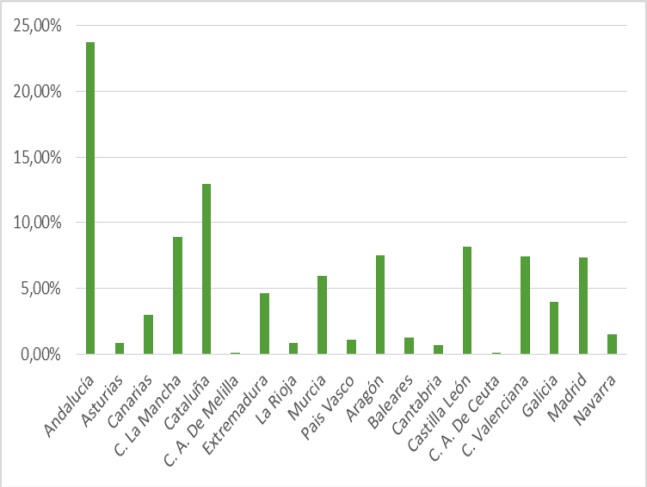
Esta evolución de la población ocupada y de la población parada del sector agrario revela que la población activa del campo se está reduciendo, puesto que hay una disminución de la ocupación y del desempleo simultáneamente. También confirma el abandono del sector por parte de la población laboral hacia los servicios y la construcción, principalmente. No solo se ha reducido la ocupación sectorial, como consecuencia de la reubicación de la fuerza de trabajo en los otros sectores, sino que también opera la duración más corta de determinadas campañas agrícolas.

En definitiva, la tasa de paro del sector agrario se sitúa en el 18,5%, cifra 3,2 puntos más alta que la tasa general del mercado de trabajo español. El otro lastre es la alta tasa de temporalidad. En el segundo trimestre de 2018 alcanza el 60% y corrige levemente la del trimestre anterior, que fue del 61,5%, lo que muestra la movilidad sectorial de la mano de obra temporera. En cualquier caso, se agudiza la desigualdad de género, ya que se incrementa la temporalidad entre las mujeres, hasta alcanzar el 69,6%. Además, persiste el fraude que se registra en la contratación de carácter temporal para actividades cíclicas en la misma época del año, porque les correspondería un contrato fijo discontinuo.

Según el directorio de empresas, en España, hay dadas de alta 62.717 empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El 88,2% corresponden a empresas que tienen su actividad económica encuadrada en agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas; a mucha distancia, respecto al número de empresas y en un segundo lugar, un 6,7% son empresas de silvicultura y explotación forestal; y en tercer lugar, un 5,1%, empresas cuya actividad se ubica en la pesca y acuicultura. La máxima concentración de empresas de esa actividad económica se sitúa en Andalucía y Catalunya; en segundo lugar. las Comunidades de Castilla León, Castilla-La Mancha, Aragón, País Valenciá, Madrid y Galicia.

Distribución de las empresas





Fuente: EP

Principales retos para el sector agropecuario

Entre otros, se podrían señalar los siguientes:

- Un relevo generacional, priorizando e incentivando la incorporación de personas jóvenes al sector. Más del 48% de la población ocupada en el sector tiene más de 45 años y las innovaciones que requiere pasan por ese relevo generacional. Las administraciones públicas deben apoyarlo con ayudas para los jóvenes agricultores, garantizando su efectividad y apoyando dichas ayudas con servicios de asesoramiento para mejorar la gestión y el rendimiento global de sus explotaciones o empresas.
- Es preciso integrar todos los aspectos relacionados con medidas preventivas, en materia de seguridad y la salud en el trabajo, garantizando que tienen la formación básica adecuada. En este sentido, sería oportuno replicar algunas prácticas de otros sectores y poner en marcha la obligatoriedad, para ser contratados, de poseer la formación básica adecuada en materia de prevención de riesgos laborales y certificarla a través de una tarjeta profesional.
- Deben ponerse en marcha medidas incentivadoras para frenar la expulsión de las mujeres del mercado de trabajo. En los últimos años, posiblemente como consecuencia de la crisis económica, se ha perdido un buen número de puestos de trabajo que anteriormente eran ocupados por mujeres.
- La evolución y especialización del sector agropecuario, y los desafíos específicos a que se enfrentan las pequeñas explotaciones en las zonas rurales, exigen un nivel adecuado de formación técnica y económica, así como una mayor capacidad de acceso e intercambio de conocimientos e información.
- Es necesario incorporar, también, programas de formación de las actividades relacionadas con la comercialización y la transformación de

productos en el ámbito local, vinculadas al rendimiento económico, agrícola y medioambiental de la explotación.

- Invertir en innovación, promover las tecnologías agrícolas innovadoras para mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Conceptos como calidad, bienestar animal, etc., son cada vez más usados y demandados por los consumidores.
- Animar al sector a poner en marcha modelos y sistemas de certificación, que permitan visualizar la trazabilidad de los productos, de forma que el consumidor pueda conocer, a ciencia cierta, cual es el proceso de producción, pero también cuales son las condiciones en las que se producen los alimentos y las condiciones de trabajadores y trabajadoras que los producen. Estos elementos aportan un valor añadido y mejoran sus posibilidades de comercialización.
- Es preciso trabajar para recuperar la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras del sector, hay que fomentar la inclusión social y la reducción de la pobreza, apostando por un desarrollo económico y social de las zonas rurales, que garantice la consecución de estos logros.
- La administración debe cuidar y apoyar a los agricultores para conseguir que estos no sean el eslabón más débil de la cadena alimentaria, siempre y cuando el proceso agrícola se desarrolle en condiciones dignas para las personas que trabajan en el sector.
- El sector agrario debe cuidar y redefinir sus sistemas de protección social para trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, garantizando no solo unas rentas adecuadas sino unas prestaciones sociales acordes con el resto de la población trabajadora (desempleo, jubilaciones, incapacidad laboral transitoria, etc.).
- El uso de las nuevas tecnologías, como la agricultura de precisión, la robótica, automatización, la satelización, entre otros, permite la mejora de los rendimientos, realizar un uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos, y de insumos, así como aumentar la sostenibilidad económica y medioambiental de toda la cadena.
- La agricultura inteligente presenta un potencial real, basado en un uso más eficiente y preciso de los recursos. La agricultura inteligente proporciona un alto valor añadido, a través de herramientas de ayuda a la decisión o para una gestión de las explotaciones más eficiente.
- La digitalización y las nuevas TIC son un incentivo para promover el relevo generacional y atraer a jóvenes, nativos digitales, a la actividad agraria. Se considera básico, para ello, dotar al territorio rural de conectividad (fibra óptica y cobertura 4G), infraestructuras, servicios básicos y oportunidades de vida, de empleo y de bienestar para fijar población y para facilitar actividades económicas allí donde hay más dificultades.
- Las pequeñas y medianas explotaciones e industrias que conforman el modelo europeo de agricultura, de tipo familiar, no se pueden quedar al margen de la revolución agro-tecnológica, de forma que la "*brecha*

digital" no ahonde más la "*brecha estructural*" existente, ya de por sí, entre lo rural y lo urbano, en vez de cerrarla, como sería lo deseable.

Medidas e instrumentos de actuación para un futuro industrial digitalizado

La industria de la UE ha mantenido una posición de liderazgo en muchos sectores de los mercados mundiales. Representa dos tercios de las exportaciones de la economía del continente y proporciona empleo a 32 millones de personas, con 1,5 millones de estos empleos creados desde 2013. Pero ha quedado en evidencia, sobre todo tras el último encuentro del Industry Day[13] -en febrero de 2018-, que la industria europea se ve afectada por las discrepancias entre las políticas industriales de sus Estados y la fragmentación que se produce en el marcado europeo.

Para corregir estos déficits, que inciden en la competitividad del continente y de sus empresas, es imprescindible tener una visión de la política industrial como proyecto europeo común y compartido, mediante un alineamiento de la política industrial española con la agenda europea, que ponga el foco en este sector, cuya aceleración está impulsando la recuperación económica y la creación de empleo.

En 2014, la UE lanzaba el plan "*Una política industrial integrada para la era de la globalización*", con el objetivo de impulsar la industria europea como base del crecimiento del nuevo modelo económico. Y con un meta: *que este sector representase el 20% del PIB en 2020*. España siguió a la UE con su "*Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España*". Una serie de medidas agrupadas en 10 bloques para conseguir un propósito similar y que ha carecido de evaluación alguna, por lo que seguimos estando muy lejos de lograr el objetivo de la UE. Mientras que el "*Marco Estratégico de la España Industrial 2030*" cuya aprobación se retrasó seis meses y, al final, quedó en el limbo tras la moción de censura que, una mayoría, facilitó para que se produjer el cambio de gobierno.

España necesita de una industria fuerte que reduzca el fuerte desequilibrio que existe con los países de nuestro entorno. CCOO de Industria confía en que el nuevo gobierno afiance los proyectos industriales, definidos en el marco de la UE, y restituya las condiciones sociales y laborales que eliminaron de un plumazo las políticas del PP.

Aunque se ha confirmado la creación de un Ministerio de Industria, sin embargo, la decepción reside en que las competencias relacionadas con este sector de actividad, se distribuye entre cinco ministerios (Industria, Comercio y

[13] El Día de la Industria de la UE, que se inició en otoño de 2017, es un encuentro entre actores clave de la industria europea, de las finanzas, la investigación y la innovación, así como responsables políticos, que tiene como objetivo evaluar el enfoque estratégico de la Comisión respecto de la política industrial y las acciones para desarrollar la competitividad industrial en Europa, definidos por el presidente de la Comisión, Juncker, el pasado otoño. sobre el futuro de la industria europea en el "*Camino hacia 2030*".

Turismo; Transición Ecológica; Hacienda; Economía y Empresa; Ciencia, Innovación y Universidades), lo que dificulta la coordinación de las políticas que hagan efectivas los objetivos de consolidación e impulso de la industria en nuestro país. A pesar de todo, existe el compromiso de que este vínculo no solo se ha creado, sino que va a ser efectivo en su desarrollo.

En este sentido, la ministra de Industria ha puesto en marcha varios grupos de trabajo entre su ministerio, junto al de Transición Ecológica y el ministerio de Economía y Empresa, para trabajar a favor de la transición energética, de forma concreta, y otro con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dirigido a facilitar la transición de los trabajadores al nuevo entorno laboral a través de la Formación Profesional.

En líneas generales, lograr un precio competitivo de la energía; desarrollar infraestructuras que incrementen las capacidades del transporte; promover la internacionalización de las empresas; impulsar una política de formación que garantice el desarrollo del talento y la capacitación de trabajadores y trabajadoras; diseñar un marco regulatorio que proteja los principios de unidad de mercado; impulsar medidas que fomenten el redimensionamiento empresarial; facilitar la inversión en innovación, desarrollo tecnológico y digitalización en las empresas; promover una política fiscal coordinada entre el Estado y las autonomías; crear un entorno normativo en materia de medio ambiente, que ayude a las empresas a ser más competitivas; … son algunos de los retos que el sector industrial, junto con el resto de la sociedad y las administraciones públicas, debe afrontar en los próximos años y de forma urgente para que la industria siga siendo un pilar básico de la economía.

CCOO de Industria, tras saludar la configuración del nuevo gabinete, recordó que España no puede esperar para cerrar la brecha económica y social. Para acabar con los fuertes desequilibrios y revitalizar la industria, la organización elaboró un decálogo para afianzar el proyecto industrial en España:

1. Cambiar sustancialmente las políticas, para incidir en el desarrollo de la industria como vector fundamental de la economía española.
2. Apostar por la especialización, para generar una industria fuerte que genere inversión productiva con apoyo público y del sistema financiero.
3. Crear un Ministerio de Industria con todas las competencias y que incorpore una Secretaría de Estado.
4. Configurar un Pacto de Estado, para el impulso de la industria.
5. Crear observatorios que contribuyan al desarrollo de sectores en los que España puede jugar un papel importante en el marco internacional, con importantes efectos en la balanza comercial (automoción, aeroespacial, siderurgia, alimentación, defensa, energía, …).
6. Afrontar los fuertes cambios que se producen en el marco del desarrollo de la digitalización y de la cuarta revolución industrial, para no quedarse fuera del mapa global.

7. Apostar por un mix de generación energética que facilite, junto a la sostenibilidad medioambiental, más capacidad de desarrollo industrial.
8. Propiciar acciones que aseguren la viabilidad de las explotaciones agrarias y, sobre todo, corregir la fuerte precariedad social y laboral que tradicionalmente acompaña a este sector. Restituir el nivel de participación y diálogo que se perdió con el Gobierno anterior.
9. Reforzar el sistema público de educación, facilitar la formación de calidad e impulsar la formación continua en las empresas.
10. Promover la recuperación salarial y la revisión de las pensiones, incluyendo la renovación del contrato de relevo.

Todo ello, requiere la configuración de un Pacto de Estado por la Industria que impulse esta actividad y que ya fue avanzado con el anterior gobierno, con escasos resultados. Las pretensiones del actual legislador es darle más contenido, incluso incorporar la financiación del mismo. Para CCOO de Industria, sería imprescindible que se apoyara en pacto que supere cualquier legislatura, lo que necesita el consenso parlamentario, teniendo en cuenta que se trata de un gobierno en transición y con una fuerte incertidumbre a la hora de dar continuidad a la actual legislatura, si consigue terminarla.

El ministerio del PP no llegó a presentar su proyecto de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad de la industria española, que venía apoyada de una línea de financiación de 811 millones de euros[14] y otra de 100 millones para financiar la transformación digital en este sector, cifra que ha elevado a 300 millones el gobierno actual. Al mismo tiempo, los PGE recogen una partida de 135 millones para financiación de proyectos estratégicos de sectores industriales prioritarios y para impulsar proyectos de desarrollo tecnológico en sectores con efecto tractor sobre actividades auxiliares o complementarias.

No son partidas que solucionen el fuerte desequilibrio de la industria española, respecto a los países de su entorno, pero su desarrollo y, sobre todo, su seguimiento y evaluación pueden marca el camino para acelerar los cambios necesarios que necesita este país para colocarse a la altura que debiera estar.

Afrontar los cambios en el empleo y en las relaciones laborales

La confluencia globalización-tecnología tensiona el modelo sociolaboral europeo y que configura un mercado global que incorpora competencias más intensas, desplazando el peso económico y geoestratégico hacia el Este y el Sur del planeta.

En este marco, en las economías de todo el mundo, desde las más industrializadas a las menos desarrolladas, se están produciendo cambios profundos y vertiginosos relacionados con el mundo del trabajo. Cambios que

[14] El denominado "*Marco Estratégico de la España industrial 2030*", al que se pidió opinión a los agentes sociales y las empresas.

obedecen a la naturaleza misma de la producción y el empleo, condicionados por las variables tecnologías, la organización de la producción, las relaciones laborales o en la propia sociedad y que se retroalimenta de la interacción entre hiperconectividad e hiperinformación, transformando modelo de negocio y gestión de las empresas[15].

La experiencia histórica pone de manifiesto que el desarrollo de los cambios tecnológicos no es homogéneo. De hecho, la intensidad y alcance de estos puede registrar variaciones significativas entre los distintos países y sectores productivos, y sus impactos afectar de forma desigual a la población, afrontando destacados retos que es preciso acometer y resolver:

a) La revolución tecnológica incrementará la productividad y el crecimiento de la economía;
b) causará la extinción de cientos de profesiones y una importante pérdida del empleo a corto plazo (físico e intelectual), que no podrá ser compensada por el ritmo de crecimiento de nuevos empleos, mostrando una capacidad sustitutoria del factor humano alarmante;
c) con el avance tecnológico aumentará la polarización de las sociedades del futuro y la desigualdad;
d) el modelo regulatorio sociolaboral, en el que se basa el Estado del Bienestar, muestra dificultades de adaptación a la intensidad y el ritmo que exige el binomio globalización-tecnología.

La incorporación y uso masivo de las tecnologías de la información ha supuesto, sin duda, importantes cambios en la forma en que el trabajo es realizado y, derivado de ello, de los problemas a los que el Derecho del Trabajo tiene que hacer frente: *robotización, control y protección de datos, protección de la intimidad, recualificación y readaptación profesional*….

Los profesionales de la función de recursos humanos deberán crear el entorno adecuado para que las empresas y los empleos del futuro puedan adaptarse y gestionar las incertidumbres de un nuevo mercado laboral. En ese contexto, las normas y las instituciones laborales, tal y como están concebidas, tanto a nivel global como a nivel local en distintos países y jurisdicciones, pronto van a perder su vigencia y actualidad, y conceptos o ejes tradicionales como el de centro de trabajo, tiempo de trabajo, contratación laboral o despido, puesto de trabajo, movilidad laboral, … deberán dejar paso a nuevas realidades en las que los profesionales trabajan.

Por otro lado, existe el riesgo de que el uso, la transformación y el almacenamiento de datos en la relación laboral conlleven un aumento de la supervisión y el control empresarial, vulnerando los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras, como el derecho a la intimidad o la vida privada. La transformación digital trastorna la organización del trabajo tradicional de mil maneras y, en todo el mundo, la flexibilidad, la adaptabilidad, pero también el modelo de negocio de una economía digital, descansan en la multiplicación de

[15] Proyecto Technos. "*Robótica y su impacto en los Recursos Humanos y en el Marco Regulatorio de las Relaciones Laborales*" Cuatrecasas 2018.

empleos no asalariados. Este proceso implica que una parte del riesgo ha sido transferida de la empresa al trabajador.

La economía digital representa el 5,6% del PIB español, contando con importantes infraestructuras tecnológicas y dan trabajo a 150.000 personas de forma directa y 184.000 indirecta, con el 50% de los empleos ubicados en disciplinas TEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), mientras que el 48% de los empleos actuales son automatizables. La actual ministra de Industria anuncia la puesta en marcha de una hoja de ruta para la digitalización de la industria y de los servicios, en cuanto al acceso a la financiación, desarrollo del talento digital e impulso de la privacidad y la seguridad.

CCOO de Industria, celebra que la Comisión Europea pretenda que, con las *"Cualificaciones y empleos en Coalición digital*", se movilice a las empresas, los gobiernos nacionales y regionales, los organismos educativos y los interlocutores sociales para que tomen medidas a la hora de hacer frente al déficit de competencias digitales en Europa.

En este sentido, y junto a UGT, se ha elaborado contenidos dirigidos a al "*Manifiesto por el Liderazgo de la Transformación Digital de la economía española mediante el desarrollo del Talento*", suscrito por ambas organizaciones con AMETIC en 2017. Acuerdo que se ha trasladado al marco de las relaciones laborales, con el objetivo de establecer criterios para el desarrollo de la transformación digital, como herramienta transversal que afecta a todos los sectores de la economía: industrial, agroalimentario, automoción, químico, cementero, utilities, administración pública, construcción, trasportes, turismo, sanitario, educativo y financiero, ...[16].

Al mismo tiempo, en el interno de CCOO se ha configurado un grupo de trabajo, conformado por las 25 mayores empresas del país de los sectores industriales competencia de esta federación, que tiene por objetivo abordar, desde la negociación colectiva en primer lugar y desde el dialogo social, los cambios en las condiciones de trabajo, las modificaciones de las estructuras contractuales y la acción sindical ante las nuevas realidades. En el mes de octubre empezará sus debates para analizar y elaborar propuestas para la negociación y la acción sindical ante los retos que se nos presentan en el desarrollo de la Industria 4.0.

Efectos de la automatización de la industria y los nuevos empleos

Dadas las tecnologías probadas en la actualidad, muy pocas profesiones (menos del 5%) son candidatas para ser totalmente automatizadas hoy día[17]. Sin embargo, casi todas las profesiones tienen potencial para ser automatizadas parcialmente, ya que un alto porcentaje de actividades son

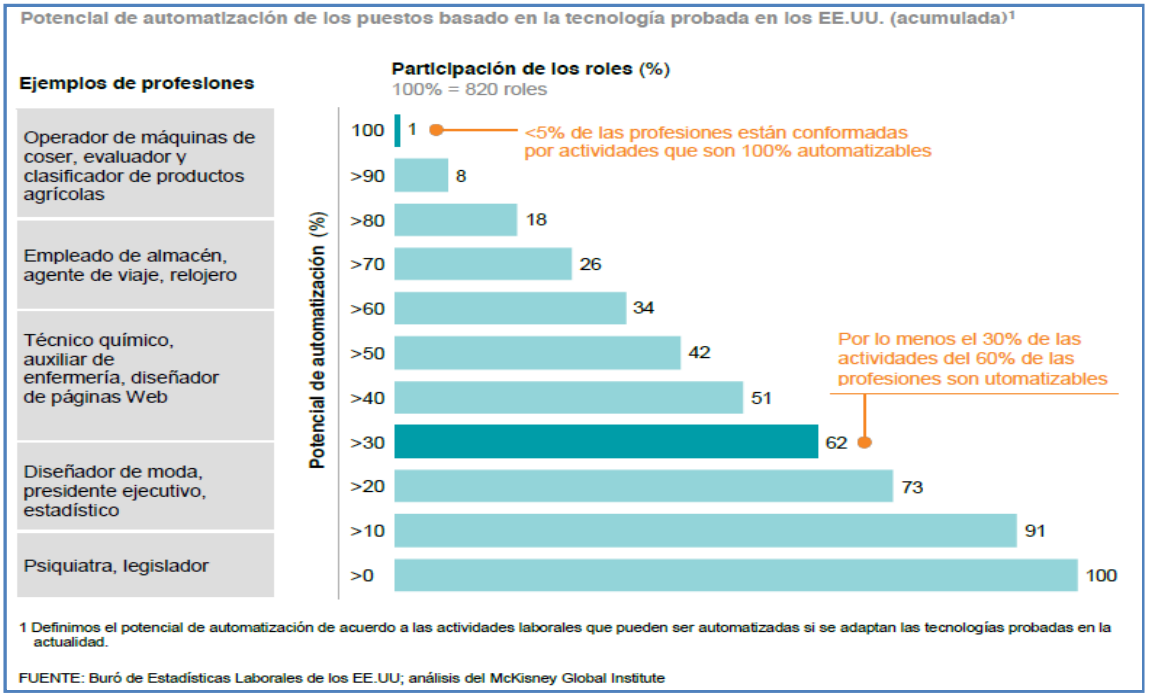
[16] "*Manifiesto por el liderazgo de la transformación digital de la economía española, mediante el desarrollo del talento*". Madrid, junio de 2017. AMETIC, CCOO y UGT. Grupo de Trabajo: "*Gestión del Cambio. Relaciones Laborales*", pendiente de formar contenidos.

[17] Teniendo como referencia la automatización de todas las actividades que conforman una profesión dada.

susceptibles de automatizar. Se estima que cerca de la mitad de las actividades remuneradas en el mundo son automatizables (49%) con las tecnologías actuales y casi el 60% tienen, por lo menos, un 30% de actividades automatizables.

Las actividades que es probable que se automaticen pronto son las relacionadas con actividades físicas, especialmente las que prevalecen en la industria manufacturera y el comercio al por menor, así como las vinculadas con la recopilación y procesamiento de datos, las cuales existen en todos los sectores, ámbitos salariales y habilidades.

Aunque el salario y los niveles de habilidad están negativamente correlacionados con el potencial de automatización (en promedio, las profesiones con los salarios y requerimientos de habilidades más altos tienen menor potencial de automatización, lo cual refleja un cierto sesgo en las habilidades), existen muchas variaciones que lo contradicen. Básicamente todas las profesiones, ya sean altamente cualificadas o no cualificadas, tienen cierto potencial de automatización (25% del trabajo es automatizable, principalmente en tareas como analizar informes y datos para sustentar decisiones, revisar los informes, preparar las asignaciones del personal, etc.).



La necesidad de habilidades sociales y emocionales precisas crecerá de forma rápida. Acompañar la adopción de tecnologías avanzadas en el lugar de trabajo significará un aumento en la necesidad de empleos con habilidades sociales y emocionales concretas. Habilidades que las máquinas están muy lejos de dominar. Si bien algunas de estas habilidades, como la empatía, son innatas, otras, como la comunicación avanzada, pueden perfeccionarse y enseñarse. El aumento de la demanda de iniciativa empresarial será el de mayor crecimiento en esta categoría. La necesidad de liderazgo y gestión de los demás también crecerá con fuerza.

El declive se producirá en casi todos los sectores, a medida que las máquinas se encargan cada vez más de tareas sencillas de ingreso de datos. La demanda de habilidades físicas y manuales ha estado disminuyendo durante los últimos 15-20 años y esta disminución continuará según el grado en que las actividades laborales puedan automatizarse, cambiando la combinación de las habilidades físicas y manuales requeridas en las ocupaciones[18]. Sin embargo, las habilidades físicas y manuales continuarán siendo la categoría más grande (medida por el tiempo invertido).

Las funciones que ya son las más automatizadas están experimentando los mayores desajustes. Estas funciones incluyen análisis de datos; tecnologías de la información, dispositivos móviles y diseño web e investigación y desarrollo. Este hallazgo es cierto en casi todos los sectores, con la notable excepción de la fabricación, en la que se espera que los desajustes de habilidades sean mayores en las operaciones de producción y fabricación.

Cambios en la organización de la empresa

El trabajo de desagregación y reconstrucción aumenta la eficiencia de la empresa y también puede crear un nuevo grupo de empleos, de "*cuello nuevo*", vinculado a cualificaciones intermedias[19]. Los empleos independientes, y otros contratistas, trabajarán más. Supone un cambio que impulsará la emergente economía de "*concierto*" o "*intercambio*".

El mayor uso de varios tipos de empleos autónomos y temporales es uno de los principales cambios organizativos previstos. Las empresas elegirán entre cinco tipos de acciones principales, a medida que construyen su fuerza de trabajo futura:

- Formando: a través de elevar la capacidad de los empleados actuales, enseñándoles habilidades nuevas o cualitativamente diferentes y contratando empleados de nivel inicial, con el objetivo de capacitarlos en las nuevas competencias necesarias.
- Redistribuyendo: los empleos con habilidades específicas para hacer un mejor uso de la capacidad ya disponible. Pueden hacerlo desglosando las tareas dentro de un trabajo y luego volviéndolas a formar de diferentes maneras, trasladando partes de la fuerza de trabajo a otras tareas que son de mayor importancia o a otras entidades, o rediseñando procesos de trabajo.

[18] Por ejemplo, los productos de almacenamiento y embalaje son más susceptibles a la automatización que los que ayudan a los pacientes en un hospital o algunos tipos de limpieza.
[19] Por ejemplo, las enfermeras y los asistentes médicos ahora realizan algunas de las tareas que los médicos de atención primaria realizaron alguna vez, como la administración de vacunas y el examen de pacientes con enfermedades de rutina. Al mismo tiempo, según International Data Corporation (IDC): "*En los próximos cinco años, las áreas que mayor crecimiento de ingresos experimentarán serán las de seguridad pública, investigación farmacéutica, diagnóstico médico y logística*".

- Contratando: personas o equipos completos con los conjuntos de habilidades requeridas, es otra opción, aunque el suministro de talento en el mercado podría ser insuficiente para que todas las empresas sigan esta estrategia. El costo total de la contratación puede ser menor que algunas de las otras opciones, incluido el reciclaje, según las habilidades necesarias.
- Subcontratando: mediante la implementación de capacidades traídas desde fuera de la organización. Por ejemplo, pueden usar contratistas, trabajadores independientes y temporales de las agencias de personal. La subcontratación permite a las empresas adquirir rápidamente las habilidades que necesitan (si tal talento está disponible). Sus desventajas incluyen la pérdida potencial de conocimiento de propiedad y propiedad intelectual, así como un ajuste deficiente con la cultura de la empresa.
- Despidiendo: particularmente en aquellas industrias que no están creciendo muy rápidamente y en las que la automatización puede sustituir a la mano de obra de una manera significativa. A menudo, esta estrategia se puede lograr mediante la reducción o congelación de nuevas contrataciones, al tiempo que permite continuar el desgaste y la jubilación normales o al reducir las horas de trabajo de algunos puestos de trabajo.

La automatización causará que un número considerable de trabajadores y trabajadoras sea desplazado, pudiendo agravar la brecha que existe entre las habilidades y el empleo de cualificados y no cualificados. Muchas profesiones se automatizarán primero parcialmente y luego totalmente, lo que tendrá diferentes implicaciones en los empleos cualificados y los no cualificados. Especialmente para estos últimos, ya que este proceso pudiera deprimir sus salarios a menos que la demanda aumente. Sin embargo, visto desde una perspectiva de largo plazo, los cambios estructurales a gran escala en la historia (donde la tecnología ha causado la pérdida de empleos), han sido acompañados por la creación de multitud de nuevos puestos de trabajo, actividades y tipos de trabajo.

La naturaleza del trabajo cambiará. Conforme los procesos se transformen por la automatización de las actividades individuales, las personas realizarán actividades complementarias al trabajo de las máquinas (y viceversa). Estas modificaciones cambiarán la organización de las compañías, la estructura y fundamentos de la competencia en las industrias y los modelos de negocio.

Para las empresas, los beneficios de la automatización en el desempeño son claros, pero la situación es más complicada para los gobiernos. Ellos deben aprovechar la oportunidad de que la economía se beneficie del potencial de crecimiento de la productividad e implementar las políticas que estimulen la inversión y los incentivos de mercado para fomentar el progreso y la innovación. Al mismo tiempo, deben lograr que las políticas evolucionen o que existan ayudas a los trabajadores e instituciones a la hora de adaptarse al impacto en el empleo.

Esto incluye reconsiderar la educación y la formación permanente, las trasferencias sociales y las redes de seguridad, así como el apoyo en la transición para quienes sean desplazados. Y los individuos, en el lugar de trabajo, necesitarán interactuar más ampliamente con las máquinas como parte de sus actividades diarias, adquiriendo nuevas habilidades que se requerirán en la nueva era de automatización.

No se puede afirmar, de manera categórica, que el precedente histórico se repetirá ahora. Pero el análisis muestra que los seres humanos seguirán siendo necesarios en la fuerza laboral: *el aumento total a la productividad que estimamos solo sucederá si las personas trabajan en conjunto con las máquinas*. Para ello, las políticas de formación y de mejora de habilidades serán importantes para apoyar a trabajadores y trabajadoras en los cambios a nuevos puestos y nuevas actividades.

Uno de los más importantes desafíos sociales será reubicar a la mano de obra desplazada. A menudo, los gobiernos no son expertos en anticipar los tipos de empleos que se pueden crear o las nuevas industrias que se pudieran desarrollar. Sin embargo, pueden iniciar y promover el diálogo sobre qué trabajos requerirán personal y sobre los desafíos sociales que necesitarán mayor atención y esfuerzo en el marco del mantenimiento del Estado de Bienestar.

Otro desafío de la nueva era será garantizar que los salarios sean lo suficientemente altos para los nuevos tipos de empleo que se generarán, evitando que continúe la erosión de la contribución de los salarios al PIB, que ha caído fuertemente desde la década de 1970. Si la automatización da como resultado una mayor presión sobre los salarios, se deben de considerar y probar ideas como los créditos por ingresos del trabajo, la renta básica universal, las transferencias condicionadas, las semanas laborales más cortas y las redes de seguridad social.

Los sistemas educativos necesitarán evolucionar, considerando los cambios en el lugar de trabajo. El Gobierno tendrá que adecuar el sistema formativo para mejorar las habilidades básicas en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y para dar un nuevo énfasis a la creatividad, así como al pensamiento crítico y sistémico. Una serie de instituciones de educación superior y otros expertos han pedido que las universidades, institutos y otros educadores desempeñen un papel más activo para satisfacer las necesidades del mercado laboral, incluso mediante el aumento de la ciencia de los datos y otras cuestiones importantes como los cursos tecnológicos.

La digitalización tendrá efectos significativos en el mercado laboral y la organización del trabajo, como el aumento de las desigualdades salariales y la limitación del acceso a los regímenes de la seguridad social, lo que puede resultar negativo si no se contrarresta de manera adecuada. Existe un vínculo directo entre los programas y los centros educativos, y la cohesión social, requiriendo la puesta al día de las competencias y cualificaciones de los usuarios de la tecnología digital y el reciclaje profesional, lo que resulta fundamental. Se debiera asociar estrechamente a las empresas y los

interlocutores sociales en la elaboración de los programas educativos en todos los niveles y formas de educación.

La regulación digital en el marco europeo

El diálogo social debe concentrarse en esos cambios que modifican profundamente la naturaleza y la organización del trabajo, atendiendo especialmente al cuestionamiento de la representación sindical y del derecho a la negociación colectiva. Las cuestiones relativas al empleo, las transiciones profesionales, la formación a lo largo de toda la vida, en particular la instrucción, la protección social y la perennidad de su financiación, así como la seguridad de la renta, figuran entre los principales temas del diálogo social en la era de la digitalización.

La UE, sus empresas y sociedades necesitan reforzarse en dos grandes áreas: *la reformulación de los grandes desequilibrios en los que se ha sustentado el Estado del Bienestar; y la adaptación de un marco regulatorio laboral*.

En materia de formación profesional, corresponde a los interlocutores sociales anticipar esa evolución para adaptar las competencias de los y las trabajadoras a las nuevas profesiones, estableciendo como las competencias digitales prioritarias la formación a lo largo de toda la vida y la adaptación de su contenido. En materia de protección social, el funcionamiento de los sistemas de seguridad social debe examinarse y, llegado el caso, adaptarse, puesto que se ha elaborado para carreras salariales continuas que están dejando de ser la norma[20].

La Comisión ha presentado una propuesta de Directiva sobre el equilibrio entre vida profesional y vida privada de los padres y cuidadores, en el marco del paquete de medidas que acompañan el pilar europeo de los derechos sociales[21]. Esta evolución requiere más formas de diálogo social, información, consultas y una sólida participación de sindicatos. Con una mayor influencia y participación de los y las trabajadoras en los órganos de decisión, así como su contribución, a todos los niveles e instancias pertinentes, tanto a nivel local como en el de los consejos de supervisión y administración.

Según un informe de Eurofound[22], la mayoría de los dirigentes empresariales están convencidos de que la participación de sindical de las empresas constituye una ventaja competitiva.

---

[20] En diez años, el número de europeos que trabajan a tiempo parcial aumentó en 11 millones (en la actualidad son 44 millones) y el número de empleos con contrato temporal aumentó en más de tres millones (lo que representa un total de 22 millones).

[21] Comunicación de la Comisión Europea "*Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores*", abril de 2017, y Dictamen del CESE en curso de elaboración.

[22] La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo es una agencia tripartita de la UE, cuya función es proporcionar conocimientos en el ámbito de las políticas sociales y laborales. Eurofound se estableció en 1975 por el Reglamento (CEE) nº 1365/75, para contribuir a la planificación y diseño de mejores condiciones de trabajo y de vida.

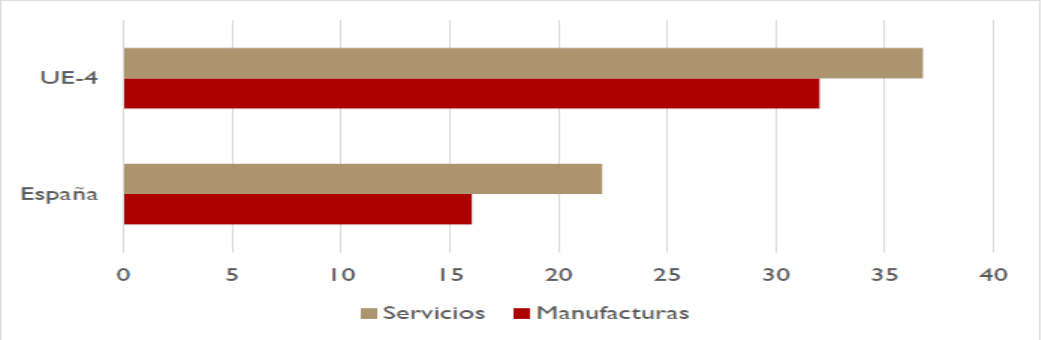
La ciberseguridad sigue estando infravalorada en el ámbito empresarial y por los Estados, por lo que la UE tiene un papel claro que jugar. Existen iniciativas emprendidas por algunos países para anticipar las nuevas formas de trabajo. Estas iniciativas unen a interlocutores sociales y actores de la sociedad civil. En este marco, el diálogo social europeo en la industria del metal llevó a una posición común, firmada por IndustriAll y la organización de empresarios CEEMET, sobre las repercusiones de la digitalización y las acciones que cabe emprender. La Federación Bancaria Europea (FBE), el sector de los seguros y los bancos centrales mantienen un diálogo similar con UniEuropa Finance.

Ningún país europeo es capaz de aprovechar, por sí solo, todas las oportunidades que ofrece la era digital. Por lo que la digitalización de la industria requiere una estrategia común para la UE y los Estados miembros, con el objetivo de reforzar la base industrial europea, atraer nuevas inversiones y recuperar las inversiones y los puestos de trabajo.

Debilidades españolas para la adecuación a los cambios y propuestas de actuación sindical

En la economía española, la participación de las tareas más fácilmente sustituibles en el empleo es más intensa en el caso de las actividades industriales (42%) que en servicios (26%). Llama poderosamente la atención, además, el reducido peso del trabajo no rutinario en comparación con los principales socios comunitarios: *Alemania, Francia, Italia y el R. Unido*. El grado de rutina implícito en una tarea no es un aspecto del contenido de la tarea sino de cómo se organiza esta tarea en un proceso de trabajo concreto.

Empleo que desarrolla tareas no rutinarias o escasamente rutinarias



Fuente: Josep Lladós, Marcoli et al. (2016) y PIAAC (2012)

Se produce un impacto negativo mayor en España, por la mayor presencia de trabajo de media o baja cualificación que desarrolla tareas automatizables, ya que los y las trabajadoras de menor nivel educativo son las que desarrollan las tareas con mayor riesgo de automatización. También pueden incidir desfavorablemente las dificultades de adaptación al cambio tecnológico, derivadas tanto del elevado peso de población empleada en tareas rutinarias, mayor de 45 años, como también por el riesgo asociado a la obsolescencia de conocimientos tecnológicos asociada a la presencia de un elevado desempleo de larga duración.

La situación actual, respecto a la calidad del empleo industrial, exige incidir de forma acelerada en adaptar el sistema educativo en su conjunto a la demanda de las empresas, conectando ambas realidades al mismo ritmo de desarrollo. Si este cambio no afecta al conjunto del sistema educativo, estaremos frente a la amenaza de una fractura social de efectos imprevisibles, con el riesgo de una brecha entre los simplemente escolarizados y los formados en capacitación para participar en un mundo global y cambiante.

Con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes y evitar situaciones de sobrecualificación, sería deseable una pronta generalización del sistema de formación profesional dual y una reforma del número de titulaciones universitarias, de sus contenidos y de su duración. Al mismo tiempo, el sistema de formación profesional dual jugará un papel clave, porque el potencial de disposición de mano de obra cualificada estará disponible para el mercado laboral de forma inmediata.

Una tasa de paro que no cede por debajo del 15% y que difícilmente descenderá hasta el 10%, refleja un volumen de desempleo estructural muy preocupante. En el fondo se esconde una doble causa: *un tipo de regulación en el ámbito privado junto con recortes en el público, aún no revertidos, que facilitan la inestabilidad y el mal empleo, y una estructura productiva que origina pocos empleos nuevos de calidad*. Ambos deberían ser corregidos.

En el primer supuesto, se trata de garantizar unos derechos laborales razonables, algo que adquiere aún más importancia con la irrupción de las nuevas tecnologías. Respecto al segundo, condición indispensable para que funcione el anterior, parece ser de importancia capital conseguir una estructura productiva más moderna, con mayor importancia de sectores en los que tenga su puesto la economía del conocimiento, lo que implica invertir en innovación mucho más de lo que se está haciendo por el momento.

Más allá de la defensa de garantías laborales razonables, parece evidente que el reto está en descubrir y desarrollar nuevas habilidades necesarias para las empresas, vinculadas con la creatividad, las relaciones personales, la empatía (el robot hará mejor el diagnostico, pero deberá administrarlo el médico), el trabajo en equipo y las habilidades informáticas que requerirán las nuevas tecnologías. En este último aspecto se deberán realizar políticas que convenzan a las empresas de la necesidad de incentivar a sus trabajadores y trabajadoras para estar siempre al día.

Para CCOO de Industria, la digitalización de la economía es un fenómeno que puede y debe ser gobernado con la participación de los sindicatos, con el objetivo de favorecer una transición justa para una transformación inclusiva en términos de empleo y condiciones de trabajo, contribuyendo a prevenir o mitigar el riesgo de segmentación y exclusión social.

En este marco, resulta determinante analizar cómo los interlocutores sociales deben reaccionar ante la multitud de desafíos económicos, industriales, políticos, legales y sociales. En este escenario, resulta imprescindible la

articulación de una estrategia integral para la transición justa a la economía digital, que favorezca la creación de empleo decente y contribuya, en paralelo, a prevenir y mitigar los riesgos de segmentación y exclusión social entre la población. En la que los sindicatos seamos actores principales en este proceso de dialogo, participando directamente y desde el principio en el diseño y desarrollo tecnológico, hasta el final, en las consecuencias sociales de la implantación de los nuevos sistemas productivos.

Como factor fundamental es la apuesta por la negociación colectiva, como herramienta de regulación para equilibrar las desigualdades e incrementar la calidad de las relaciones laborales en las empresas y sectores afectados por la digitalización. En este marco, los sindicatos, los representantes de los y las empleadas, deben considerarse actores competentes y legítimos en la evolución de estos procesos. En este sentido, ha venido siendo una reivindicación sindical histórica el que la "*democracia penetre en las empresas*" para que los y las trabajadoras se sientan partícipes de los resultados industriales, económicos y sociales de la misma. Lo que requiere un cambio de actitud relevante para una parte importante de los que gestionan la actividad empresarial en nuestro país.

Todo ello, incorpora la necesidad de insistir en cambios radicales en las políticas de recursos humanos, que fomenten el desarrollo de las cualificaciones profesionales, el reconocimiento del valor del conocimiento y las capacidades de trabajadores y trabajadoras para el aumento de la productividad, basado más en la eficiencia de las tecnologías y las estructuras organizativas que en los bajos salarios.

Este país tiene que superar el atraso histórico del proceso de industrialización, respecto a los países líderes y ello supuso serias dificultades para disponer de la tecnología propia necesaria y una fuerte dependencia tecnológica del exterior. También es importante la consolidación de estructuras monopolísticas, fuertemente dependientes de los recursos y favores públicos. El hecho más sobresaliente es el menor peso que tienen en España frente a otros países los sectores más intensivos en tecnología[23].

Esto se pone de manifiesto porque a lo largo de la crisis, las partidas vinculadas con la I+D+i han descendido incluso más que el promedio de los gastos del Estado. Los criterios de partida están anclados en la antigua concepción de los fallos del mercado, pero olvidando una visión más proactiva de la política en lo que se refiere a la constitución de escenarios futuros y alternativas de producción y competitividad. Y, a pesar del avance en la creación de tecnología propia, la economía española sigue siendo dependiente de tecnología producida en el exterior.

Como mínimo, debería hacerse el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos públicos destinados a la I+D+i. Pretender en estos momentos de mudanza un incremento de los presupuestos del 2018 no parece realista, pero

[23] "*¿Qué modelo de industria queremos para España?*". José Molero, presidente del Foro de Empresas Innovadoras y catedrático de Economía Aplicada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (UCM).

se nos ocurre una forma sencilla de incrementar en términos prácticos los recursos dirigidos a los actores de la innovación, y esta no es más que la mejora en la gestión de dichos presupuestos. Si se lograse reducir significativamente la falta de ejecución (v.g. pasar del 70% de 2017 al 30% en 2018), supondría de hecho disponer de cerca de 2.000 millones de euros adicionales para inyectar en el sistema nacional de I+D+i).

Además, sigue habiendo un déficit importante en la articulación de lo público y lo privado, manifestándose con particular intensidad en unas relaciones universidad-empresa, aún lejos de estándares internacionales avanzados y, sobre todo, falta una cultura de evaluación de los impactos reales de las políticas y programas establecidos.

En definitiva, la industria de este país requiere acelerar dos ámbitos de actuación: adaptar nuestro desarrollo tecnológico a las necesidades reales de la industria, dadas las expectativas de cambios rupturistas en el futuro más o menos inmediato; y adecuar la mano de obra a esas necesidades, tanto desde el punto de vista profesional como educativo. Tendiendo en cuenta que España se encuentra muy retrasada en ambos aspectos, la necesidad de realizar un impulso más fuerte que el de los países de nuestro entorno es evidente.

Los sindicatos hemos ofrecido nuestra colaboración para la consecución de estos objetivos, porque somos quienes vivimos los cambios y, por tanto, conocemos de primera mano, junto a las empresas, los requerimientos exigibles para hacerlos realidad. En este marco, hay que recordar que ningún gobierno, desde que se instaló la democracia, en este país ha tenido en cuenta este valor a la hora de utilizarlo para facilitar los objetivos. El caso alemán o el francés, sin olvidar los instrumentos de diálogos social disponibles en los países nórdicos, han sido y son ejemplos de colaboración y éxito en el desarrollo de sus economías en general y de su industria en particular.